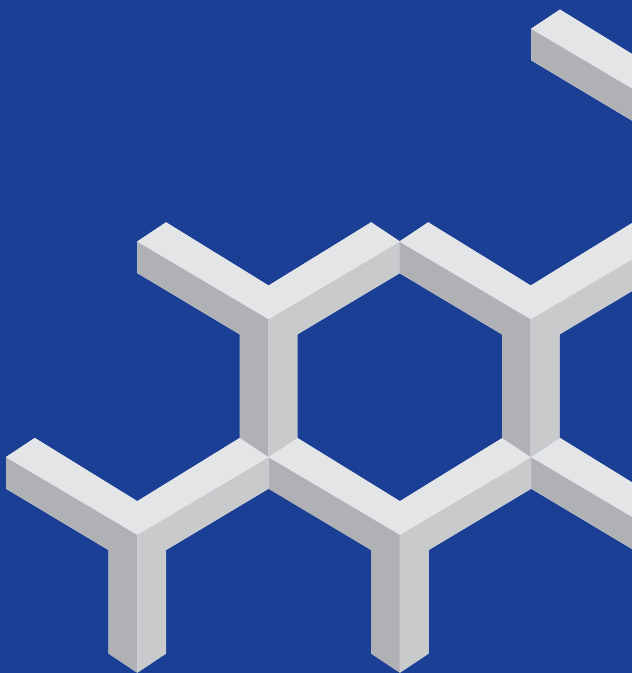




Código de
Buenas Prácticas Arbitrales
del Club Español del Arbitraje



cea

www.clubarbitraje.com

**EL CÓDIGO CEA DE
BUENAS PRÁCTICAS ARBITRALES**

PRESENTACIÓN

La fortaleza del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias reside en su capacidad para generar decisiones que las partes consideren imparciales. Esta percepción de imparcialidad deriva en gran medida de la llevanza correcta del procedimiento arbitral. En este sentido, un laudo tiene mayores posibilidades de ser cumplido voluntariamente si la parte perdedora reconoce que los árbitros condujeron el procedimiento de forma firme y neutral. De ahí el conocido adagio de que, en arbitraje, un procedimiento es tan bueno como lo son sus árbitros.

En este proceso de creación de confianza, las instituciones administradoras del arbitraje (en adelante, “instituciones arbitrales”) también juegan un papel decisivo. Cada día, éstas se relacionan directamente con las partes, sus representantes y los árbitros con la intención de llevar a buen término la resolución de los conflictos. Si las instituciones no mantuvieran sus contactos bajo un estricto estándar ético y profesional, el procedimiento arbitral podría verse afectado por la existencia de dudas sobre la neutralidad de sus actuaciones, por ejemplo al designar árbitros, durante los procedimientos de impugnación o incluso en la selección de la sede arbitral; todos estos, momentos críticos para el desarrollo de un arbitraje.

En función de esta clara necesidad y apoyados en el consenso existente en el seno de la comunidad jurídica española para impulsar la práctica arbitral, el club español del arbitraje presenta la primera parte del Código CEA de Buenas Prácticas Arbitrales. El Código estará integrado por varias secciones, cada una dedicada a un sector específico de la práctica arbitral. Cada sección contiene un listado -no exhaustivo- de recomendaciones, que se convertirán en deberes para las instituciones que libremente decidan adoptarlas.

El Código está abierto a todas las aportaciones que signifiquen una contribución a la mejor práctica del arbitraje. Se pretende así destacar su abierta vocación de futuro, que también está presente en el objetivo del COMITÉ DE BUENAS PRÁCTICAS ARBITRALES DEL CLUB ESPAÑOL DEL ARBITRAJE de crear en su seno una COMISIÓN DE CONSULTAS, al que podrán dirigirse todos los operadores del arbitraje.

Esta primera sección¹ del Código que ahora presentamos es la destinada a las INSTITUCIONES ARBITRALES. En ella se pretende recoger algunos de los principios y deberes éticos que las instituciones administradoras de arbitrajes podrían observar a fin de contribuir a consolidar la confianza existente en el arbitraje como alternativa efectiva a la jurisdicción. El éxito de toda institución administradora depende en gran medida de la conducta irreprochable de todos los que colaboran en ella. Ésta es una responsabilidad compartida que se puede llevar a buen término a través de la estricta observancia de cánones de conducta profesionales. Confiamos en que esta primera sección del Código contribuya a lograrlo.

COMITÉ DE BUENAS PRÁCTICAS ARBITRALES
CLUB ESPAÑOL DEL ARBITRAJE
DICIEMBRE, 2005

1 El Comité de Buenas Prácticas Arbitrales designó para elaborar el texto de esta primera sección del Código de Buenas Prácticas Arbitrales a una ponencia integrada por D. José Antonio Caínzos, D. Luis Felipe Castresana, D^a. Mercedes Fernández, D. Vicente Sierra y D. Miguel Virgós, siendo presidente del Comité D. Jesús Remón. El texto de la ponencia fue aprobado por la Junta Directiva del Club.

ÍNDICE

SECCIÓN PRIMERA: LAS INSTITUCIONES ARBITRALES

RECOMENDACIONES	11
I. CALIDAD DE SERVICIOS	
Deber 1: Del Reglamento	12
Deber 2: De la Auto-Evaluación.....	12
Deber 3: De la Adopción de Buenas Prácticas...	12
II. INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL	
Deber 4: Del Asesoramiento	13
Deber 5: Del Auto-Nombramiento.....	13
Deber 6: De los Conflictos de Intereses	13
Deber 7: De las Fuentes de Remuneración	13
III. TRANSPARENCIA	
Deber 8: Del régimen jurídico y la financiación ..	14
Deber 9: De la naturaleza y alcance de los servicios	14
Deber 10: De los órganos y procedimientos.....	14
Deber 11: De las listas de árbitros.....	14
Deber 12: De los criterios para el nombramiento y revocación de árbitros.....	15
Deber 13: De los costes del arbitraje.....	15
IV. CELERIDAD	
Deber 14: De los plazos	15
Deber 15: Del uso de medios idóneos.....	15
V. FLEXIBILIDAD	
Deber 16: De la adaptación de los reglamentos.	16
VI. SELECCIÓN OBJETIVA DE ÁRBITROS	
Deber 17: De la primacía de la voluntad de las partes	16
Deber 18: De la cualificación de los árbitros	16
Deber 19: De la disponibilidad de los árbitros	17
Deber 20: De la independencia e imparcialidad de los árbitros	17
Deber 21: Del desempeño de sus funciones por los árbitros	17

VII. CONFIDENCIALIDAD	
Deber 22: De la identidad de las partes y del fondo del asunto	18
Deber 23: De la custodia de la documentación ..	18
Deber 24: De la conservación de expedientes ...	18
Deber 25: Del registro y archivo de laudos.....	19
Deber 26: De la publicación de los laudos	19
VIII. PROMOCIÓN	
Deber 27: De la formación	19
Deber 28: De la difusión	19
REFERENCIAS.....	21

SECCIÓN SEGUNDA: LOS REGLAMENTOS DE LAS INSTITUCIONES ARBITRALES

RECOMENDACIONES	26
I. EL CONVENIO ARBITRAL	26
II. EL NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS	27
III. PROCEDIMIENTO.....	28
IV. MEDIDAS CAUTELARES	30
V. PRUEBA	30
VI. EL LAUDO.....	31
VII. REGLAMENTO ARBITRAL MODELO DEL CEA.....	31

REGLAMENTO ARBITRAL MODELO DEL CEA

I. CUESTIONES GENERALES	
1. Ámbito de aplicación	32
2. Reglas de interpretación	32
3. Comunicaciones.....	33
4. Plazos	34
II. COMIENZO DEL ARBITRAJE	
5. Solicitud de arbitraje.....	35
6. Respuesta a la solicitud de arbitraje	37
7. Reconvencción	39

8.	Revisión <i>prima facie</i> de la existencia de convenio arbitral	40
9.	Provisión de fondos para costas	41
III. NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS		
10.	Independencia e imparcialidad	42
11.	Número de árbitros y procedimiento de designación	43
12.	Confirmación o nombramiento por la Corte .	44
13.	Pluralidad de partes	45
14.	Acumulación.....	46
15.	Recusación de árbitros	47
16.	Sustitución de árbitros y sus consecuencias	48
IV. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL		
17.	Lugar del arbitraje	49
18.	Idioma del arbitraje.....	49
19.	Representación de las partes	49
20.	Reglas de procedimiento	50
21.	Normas aplicables al fondo.....	50
22.	Renuncia tácita a la impugnación	51
V. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
23.	Primera orden procesal.....	51
24.	Demanda.....	52
25.	Contestación a la demanda	52
26.	Reconvención	53
27.	Nuevas reclamaciones.....	53
28.	Otros escritos	53
29.	Pruebas.....	53
30.	Audiencias.....	54
31.	Testigos	55
32.	Peritos	56
33.	Conclusiones.....	57
34.	Impugnación de la competencia del tribunal arbitral	57
35.	Rebeldía.....	58
36.	Medidas cautelares	58
37.	Cierre de la instrucción del procedimiento ...	59

VI. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y EMISIÓN DEL LAUDO	
38. Plazo para dictar el laudo.....	59
39. Forma, contenido y comunicación del laudo	60
40. Laudo por acuerdo de las partes	61
41. Examen previo del laudo por la corte.....	61
42. Corrección, aclaración y complemento del laudo	62
43. Eficacia del laudo	62
44. Otras formas de terminación.....	63
45. Custodia y conservación del expediente arbitral.....	63
46. Costas	64
47. Honorarios de los árbitros	64
48. Confidencialidad.....	64
49. Responsabilidad.....	65
50. Procedimiento abreviado	65

SECCIÓN PRIMERA
LAS INSTITUCIONES ARBITRALES

RECOMENDACIONES

- I. CALIDAD DE SERVICIOS. Las instituciones arbitrales prestarán sus servicios de manera objetiva, eficaz y responsable.
- II. INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL. Las instituciones arbitrales actuarán de forma independiente y neutral en la administración de los arbitrajes.
- III. TRANSPARENCIA. Las instituciones arbitrales proporcionarán información completa y transparente sobre la institución, los servicios que ofrece y los procedimientos internos que siguen en la administración de arbitrajes.
- IV. CELERIDAD. Las instituciones arbitrales impulsarán la celeridad de trámite en los asuntos que administren.
- V. FLEXIBILIDAD. Las instituciones arbitrales consentirán la adaptación de su reglamento en los asuntos que administren.
- VI. SELECCIÓN OBJETIVA DE ÁRBITROS. Las instituciones arbitrales utilizarán criterios objetivos en la selección y nombramiento de árbitros.
- VII. CONFIDENCIALIDAD. Las instituciones arbitrales protegerán la privacidad y confidencialidad de las asuntos que administren.
- VIII. PROMOCIÓN. Las instituciones arbitrales promoverán el recurso al arbitraje para la resolución de controversias.

LAS INSTITUCIONES ARBITRALES

I. CALIDAD DE SERVICIOS

Las instituciones arbitrales prestarán sus servicios de manera profesional, eficaz y responsable.

Deber 1: Del reglamento

Las instituciones arbitrales administrarán sus procedimientos sobre la base de reglamentos actualizados que se adapten a las necesidades del tráfico y reflejen la evolución de las prácticas arbitrales².

Deber 2: De la auto-evaluación

Las instituciones arbitrales procurarán revisar, evaluar y, de ser posible, certificar de forma periódica la calidad de sus procedimientos internos³.

Deber 3: De la adopción de buenas prácticas

Las instituciones arbitrales procurarán la observancia de buenas prácticas en la gestión de los asuntos que se les encomiende, mediante la adopción voluntaria de este código .

II. INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL

Las instituciones arbitrales actuarán de forma independiente y neutral en la administración de los arbitrajes.

2 En función de esta obligación, las instituciones administradoras formarán grupos de trabajo que supervisen permanentemente la vigencia y actualización de los reglamentos patrocinados.

3 El medio de hacerlo se adaptará a las circunstancias y recursos específicos de cada institución, pudiendo incluir desde la puesta a disposición de formularios de quejas/sugerencias, pasando por la implementación de mecanismos de auto-evaluación periódicos, hasta la certificación externa. Las instituciones arbitrales enviarán a las partes y los árbitros que participen en procedimientos bajo su administración un cuestionario que les permitan evaluar sus servicios y detectar eventuales problemas o necesidades.

Deber 4: Del asesoramiento

Las instituciones arbitrales no deberán ofrecer, bajo ninguna forma o modalidad, asesoría jurídica sobre asuntos que sean o puedan ser objeto de arbitraje administrado por dicha institución⁴. De igual forma no podrán bajo ninguna circunstancia emitir recomendación alguna sobre la prestación de servicios jurídicos de abogados o despachos determinados.

Deber 5: Del auto-nombramiento

Las instituciones arbitrales evitarán designar como árbitros a personas que desempeñen cargos de administración, dirección o gestión o sean miembros de sus órganos de gobierno, salvo que las partes de mutuo acuerdo las nombren o el Reglamento lo permita. En estos casos, las designaciones se limitarán al puesto de árbitro único o presidente del tribunal. El mismo deber se aplica a su personal empleado.

Deber 6: De los conflictos de intereses

Las instituciones arbitrales deberán informar a las partes de cualquier situación que pueda generar dudas sobre su independencia y neutralidad.

Deber 7: De las fuentes de remuneración

Es responsabilidad de las instituciones arbitrales asegurar que ningún miembro de su personal reciba de las partes en asuntos bajo su administración retribución, ni compensación de ningún tipo. Este deber incluye la prohibición de trabajar para los miembros del tribunal arbitral por compensaciones adicionales, salvo que las partes expresamente lo consientan⁵.

4 Se considerará asesoría jurídica la elaboración de informes o dictámenes.

5 Se incluye la prohibición expresa de aceptar regalos, gratificaciones o bonos, sin importar su naturaleza y/o valor económico, de parte de abogados, árbitros, o cualquier persona relacionada con la tramitación de un asunto.

III. TRANSPARENCIA

Las instituciones arbitrales proporcionarán información completa y transparente sobre la institución, los servicios que ofrece y los procedimientos internos que sigue en la administración de arbitrajes.

Deber 8: Del régimen jurídico y la financiación

Las instituciones arbitrales harán pública la información sobre su estatuto jurídico y su régimen de gobierno interno, así como sobre sus fuentes principales de financiación, incluyendo las entidades, organizaciones, empresas o instituciones que patrocinen sus actividades.

Deber 9: De la naturaleza y alcance de los servicios

Las instituciones arbitrales harán públicas las características, naturaleza y alcance de sus servicios⁶. Este deber incluye información sobre la eventual especialización de sus servicios en sectores o ramas determinados de la actividad económica.

Deber 10: De los órganos y procedimientos

Las instituciones arbitrales informarán sobre los órganos y los procedimientos mediante los cuales ejerzan las facultades de administración que les confiera su reglamento.

Deber 11: De las listas de árbitros

En caso de que la institución arbitral mantenga una lista de árbitros, deberá hacer públicos los criterios de selección y el procedimiento establecido para integrarse en dicha lista⁷.

6 Se entiende que esta información deberá ser comunicada antes de aceptar la administración de un arbitraje y será responsabilidad de las instituciones administradoras cualquier omisión en este sentido.

7 Sin perjuicio de las condiciones especiales previstas en sus reglamentos o estatutos, las listas deberán ser abiertas y, siempre que reúna las condiciones exigidas, ningún profesional podrá ser rechazado por cuestiones ajenas a su aptitud, capacidad y probidad para ejercer como árbitro.

Deber 12: De los criterios para el nombramiento y remoción de árbitros

Las instituciones arbitrales deberán hacer públicos los criterios que seguirán en el nombramiento, recusación y, en su caso, remoción de árbitros.

Deber 13: De los costes del arbitraje

Las instituciones arbitrales tienen el deber de hacer público sus derechos de administración y, si los hubiere, de admisión, así como los honorarios de los árbitros y los costes de otros servicios asociados al procedimiento arbitral⁸. Los aranceles, derechos y costes de las instituciones arbitrales atenderán a criterios de moderación y se ajustarán en función de la cuantía y complejidad de los asuntos.

IV. CELERIDAD

Las instituciones arbitrales impulsarán la celeridad de los procedimientos que administren.

Deber 14: De los plazos

Las instituciones arbitrales velarán por que los plazos señalados en su reglamento se cumplan de forma efectiva y procurarán evitar las dilaciones indebidas⁹.

Deber 15: Del uso de medios idóneos

Las instituciones arbitrales apoyarán el uso de tecnologías y medios de comunicación que mejor sirvan al objetivo de la resolución en tiempo adecuado

8 Se consideran servicios asociados, entre otros, la cesión de locales y equipamientos, la grabación de audiencias y los servicios de interpretación, cuando fueran prestados por la propia institución. Este deber de información incluye el de anunciar con una anticipación razonable cualquier variación o modificación en los cuotas de sus servicios. Estas modificaciones, en todo caso no podrán aplicarse a los asuntos ya iniciados.

9 Este deber deberá tener como meta y límite el mejor beneficio de las partes. La falta de ejercicio de sus funciones en un tiempo razonable por un árbitro ya nombrado es causa de remoción.

de los asuntos administrados y favorecerán las comunicaciones simultáneas entre las partes y la institución arbitral.

V. FLEXIBILIDAD

Las instituciones arbitrales consentirán la adaptación por acuerdo de las partes de las previsiones de sus reglamentos en los asuntos en los que administren.

Deber 16: De la adaptación de los Reglamentos

Las instituciones arbitrales permitirán el ajuste, por acuerdo de las partes, de las previsiones de sus reglamentos a las circunstancias del asunto. Esta flexibilidad respetará en todo momento la tutela efectiva de derechos de las partes, incluidas las garantías procesales de igualdad, audiencia y contradicción.

VI. SELECCIÓN OBJETIVA DE ÁRBITROS

Las instituciones arbitrales utilizarán criterios objetivos en la selección y nombramiento de árbitros.

Deber 17: De la primacía de la voluntad de las partes

Las instituciones arbitrales respetarán las preferencias de las partes en la formación del tribunal arbitral, con el límite de las condiciones de cualificación profesional y aptitud personal que la institución requiera en sus nombramientos¹⁰.

Deber 18: De la cualificación de los árbitros

Las instituciones arbitrales tienen el deber de garantizar que los árbitros por ella nombrados cuenten con la experiencia y la cualificación técnica y/o profesional más adecuada para resolver las

¹⁰ Las instituciones arbitrales llevarán a cabo la designación de los árbitros de forma directa, por listas o respetando el nombramiento por las partes, según sea el caso.

cuestiones objeto de controversia¹¹. La experiencia como árbitro será, en todo caso, imprescindible para el nombramiento como árbitro presidente o árbitro único¹².

Deber 19: De la disponibilidad de los árbitros

Las instituciones arbitrales velarán en sus nombramientos por que los árbitros designados dispongan del tiempo necesario para asegurar la terminación en tiempo debido y con la calidad exigible del procedimiento arbitral¹³.

Deber 20: De la independencia e imparcialidad de los árbitros

Las instituciones arbitrales exigirán de cada uno de los árbitros una declaración de independencia e imparcialidad donde revele y se obligue a revelar sin demora durante el curso del procedimiento cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas, desde la perspectiva de las partes, sobre su independencia o imparcialidad¹⁴. Las instituciones arbitrales deberán establecer en sus reglamentos procedimientos ágiles de recusación.

11 Los mecanismos y procedimientos que aseguren el cumplimiento de este deber, así como los parámetros utilizados para valorar las credenciales de los árbitros serán determinados por las propias instituciones arbitrales.

12 La valoración de la experiencia para conducir un arbitraje conforme a su reglamento es facultad discrecional de la institución arbitral.

13 Los criterios establecidos para valorar esta circunstancia deberán garantizar que los árbitros estén en posibilidad material de analizar y valorar de forma razonable todas las alegaciones de las partes. La institución en todo momento deberá evitar el nombramiento de árbitros con excesiva carga de trabajo.

14 Las instituciones serán responsables de poner en marcha los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar a las partes que los árbitros cumplan con su deber de transparencia.

Deber 21: Del desempeño de sus funciones por los árbitros

Las instituciones arbitrales velarán por que los árbitros que actúen bajo su reglamento realicen un desempeño correcto de sus funciones¹⁵. Un árbitro deberá ser sustituido cuando se determine que existe un impedimento para el cumplimiento de sus funciones o el árbitro incumple el reglamento. A tal efecto, las instituciones arbitrales establecerán en sus reglamentos el procedimiento de remoción pertinente.

VII. CONFIDENCIALIDAD

Las instituciones arbitrales protegerán la privacidad y confidencialidad de los asuntos que administren¹⁶.

Deber 22: De la identidad de las partes y del fondo del asunto

Las instituciones arbitrales observarán discreción absoluta sobre la identidad de las partes y el fondo de los asuntos que administren¹⁷.

Deber 23: De la custodia de la documentación

Las instituciones arbitrales establecerán mecanismos que aseguren la confidencialidad de los documentos e informaciones aportados al procedimiento.

Deber 24: De la conservación de expedientes

Las instituciones arbitrales conservarán por un periodo razonable la documentación del

15 Las faltas en el desempeño adecuado de sus funciones llevarán como consecuencia, con sujeción a las previsiones de los reglamentos, la oposición o el rechazo de las instituciones arbitrales a futuros nombramientos.

16 Ningún tipo de información podrá ser revelada sin previa autorización por escrito de las partes involucradas.

17 Las instituciones administradoras podrán hacer uso de la información relativa a la naturaleza de los asuntos y sus cuantías con fines estadísticos.

procedimiento y, salvo que las partes, a su costa, pidan la devolución de documentos, procederán a su destrucción, previa comunicación por escrito a las partes.

Deber 25: Del registro y archivo de laudos

Las instituciones arbitrales instrumentarán el registro y archivo de laudos de los procedimientos administrados de forma que se garantice la confidencialidad¹⁸.

Deber 26: De la publicación de los laudos

A menos que alguna de las partes se oponga, las instituciones arbitrales contribuirán a la formación de jurisprudencia arbitral haciendo públicos, una vez suprimida toda información confidencial, los laudos relevantes dictados bajo su reglamento¹⁹.

VIII. PROMOCIÓN

Las instituciones arbitrales promoverán el recurso al arbitraje para la resolución de controversias.

Deber 27: De la formación

Las instituciones arbitrales, por sí o en colaboración con otras instituciones, procurarán ofrecer programas de formación permanente que promuevan la profesionalización de la práctica arbitral.

18 La consulta de esta información será posible únicamente por las partes o sus representantes autorizados. Las instituciones administradoras podrán permitir el acceso a sus archivos para proyectos de investigación relacionados con el arbitraje. Este acceso deberá ser precedido de la suscripción de un acuerdo de confidencialidad sobre datos privados y bajo ninguna circunstancia el acceso incluirá los memorandos, notas y escritos presentados por las partes durante los procedimientos.

19 A tal efecto, las instituciones arbitrales informarán en sus reglamentos de su política de publicación de laudos y advertirán a las partes de su derecho a oponerse a la publicación de los laudos o resoluciones que recaigan en el procedimiento.

Deber 28: De la difusión

Las instituciones arbitrales tienen la misión de difundir el arbitraje como medio de resolución de controversias y contribuir a generar una cultura arbitral. En particular, mediante la organización o participación en cursos, conferencias y simposios. También incentivarán la producción editorial en temas de arbitraje y procurarán la presencia del arbitraje en los medios de comunicación²⁰.

20 Esta actividad deberá tener como objetivo extender el foro de análisis y debate del arbitraje a colectivos distintos de las comunidades tradicionales de usuarios y contribuir a la difusión de la agenda de actividades y eventos de las instituciones arbitrales.

REFERENCIAS

Esta propuesta está inspirada en los siguientes documentos:

- Statement of Ethical Principles of the American Arbitration Association
- National Arbitration Forum's Arbitration Bill of Rights (with commentary)
- CPR Principles for ADR Provider Organizations
- CPR Model Rule for the lawyer as third-party neutral

Además, se consultaron las siguientes fuentes:

A. Reglamentos

- ABA Model Rules of Professional Conduct
- JAMS Arbitrators Ethics Guidelines
- NAF Code of Conduct for Arbitrators
- Swiss Chamber's Code of Ethics of Arbitrators
- IBA International Code of Ethics
- Washington Mediation Association's Standards of Practice for Mediators
- National Mediation Board. Uniform Guidelines for Placement on the National Mediation Board's Roster of Arbitrators
- DC Bar. Comparison Chart on Arbitrator's Standards of Conduct

B. Artículos

- Murray L. Smith, Impartiality of the party appointed arbitrator, *Arbitration International*, Vol. 6, No. 4 (1990).

- Sigfried H. Elsing, Ethical Issues in Litigation Perspective, IBA International Litigation News, Oct. 2004.
- Doak Bishop and Lucy Reed, Practical Guidelines for interviewing, selecting, and challenging party-appointed arbitrators in international commercial arbitration, Arbitration International, Vol. 14. No. 4 (1998).
- Bruce Meyerson and John M. Townsend, Revised Code of Ethics for Commercial Arbitrators Explained, Dispute Resolution Journal (April 2004).
- Otto de Witt, Nathalie Voser and Neomi Rao, Background information on the IBA Guidelines on Conflict of interest in international arbitration, Business Law International, Vol. 5, Issue 3, September 2004.

SECCIÓN SEGUNDA
LOS REGLAMENTOS DE LAS INSTITUCIONES
ARBITRALES

PRESENTACIÓN

El Club Español del Arbitraje dedica la segunda sección de su **Código de Buenas Prácticas Arbitrales** a los Reglamentos de las Instituciones Arbitrales²¹.

Las Instituciones Arbitrales desempeñan un papel fundamental en el proceso de generación de confianza que es clave para el desarrollo del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos. Sobre esta base, los Reglamentos Arbitrales son instrumentos esenciales para difundir entre los operadores pautas de seguridad y para comunicar a los posibles interesados las señas de identidad de las respectivas instituciones.

Al acometer esta segunda sección del Código, el CEA ha considerado oportuno hacer públicas ciertas recomendaciones dirigidas a las partes, abogados y árbitros, así como poner a disposición de la comunidad arbitral un modelo de Reglamento que considera conforme a las orientaciones internacionales en la materia. Confiamos en que esta segunda sección del Código contribuya a seguir impulsando el desarrollo del arbitraje.

COMITÉ DE BUENAS PRÁCTICAS ARBITRALES
CLUB ESPAÑOL DEL ARBITRAJE
OCTUBRE, 2008

21 El Comité de Buenas Prácticas Arbitrales designó para elaborar el texto de esta segunda sección del Código de Buenas Prácticas Arbitrales a una ponencia integrada por D. José Antonio Caínzos, D. Miguel Ángel Fernández-Ballesteros, D. Julio González Soria, D^a. Mercedes Fernández, D. Miguel Virgós, D^a Pilar Perales Viscasillas y D. Vicente Sierra, bajo la presidencia de D. Jesús Remón. La ponencia quiere expresar su agradecimiento a la colaboración prestada en el curso de los trabajos por D^a Elena Gutiérrez, D. Marco de Benito y D. Ángel Pérez Pardo, miembros del CEA-40. El texto de la ponencia fue aprobado por la Junta Directiva del Club tras su revisión por una comisión *ad hoc* integrada por D. José M^a Alonso, D. David Arias, D. Juan Carlos Calvo, D. Juan Fernández-Armesto, D. Miguel Ángel Fernández-Ballesteros y D. Jesús Remón.

RECOMENDACIONES

I. EL CONVENIO ARBITRAL

1. Cuando la administración del arbitraje se encomiende a alguna institución arbitral, la cláusula arbitral deberá incluir la referencia a que el Reglamento de la Corte aplicable sea el vigente en el momento de iniciar el arbitraje, para evitar dudas sobre el Reglamento aplicable cuando éste haya sido modificado entre el momento de la firma de la cláusula arbitral y el inicio del procedimiento.
2. Se recomienda, en todo caso, elegir como sede del arbitraje un país que haya ratificado el Convenio de Nueva York de 1958.
3. Se recomienda asimismo el arbitraje de Derecho, salvo que razones especiales aconsejen en un caso concreto el arbitraje de equidad.
4. Deben evitarse las cláusulas “partidas” en las que unos elementos del contrato queden sometidos a arbitraje y otros a los tribunales del Estado. Si se utilizaran, deberá establecerse con claridad qué elementos quedan sometidos a arbitraje y cuáles no.
5. Es muy recomendable establecer reglas que faciliten las comunicaciones y notificaciones y eviten dudas sobre el cómputo de plazos.
6. Conviene hacer constar expresamente en la cláusula arbitral (o, de común acuerdo, una vez iniciado el arbitraje) el carácter confidencial o no del procedimiento y, en su caso, el alcance del deber de confidencialidad.
7. Si alguna de las partes es una empresa pública, es aconsejable que renuncie desde el principio expresamente a todo privilegio de inmunidad que pueda ostentar.

8. No deben establecerse para los árbitros requisitos o limitaciones que puedan dificultar o demorar en exceso su designación.

II. EL NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS

9. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros.
10. Con carácter general, se recomienda encomendar la decisión de las controversias a un árbitro único, sin perjuicio de la posibilidad de nombrar un colegio arbitral de tres árbitros si las circunstancias lo aconsejan.
11. Con carácter general, y sin perjuicio de las circunstancias singulares que puedan servir para identificar la oferta de algunas instituciones arbitrales, no es recomendable emplear sistemas de listas cerradas de árbitros; y, en todo caso, no se aconseja exigir que formen parte de la lista de la Corte los árbitros que deban proponer las partes.
12. Una fórmula con ventajas es que la Corte proponga a las partes una terna de posibles árbitros para la designación del árbitro único o, cuando proceda, del presidente del colegio arbitral.
13. Se debe valorar, en todo caso, la posibilidad de que sea la Corte la que nombre a todos los árbitros.
14. Como regla general, en arbitrajes con partes de distinta nacionalidad, el árbitro único o el árbitro presidente deberá ser de nacionalidad distinta a la de las partes.
15. En arbitrajes con pluralidad de partes, si los demandantes o los demandados no alcanzan un acuerdo sobre el árbitro que les corresponda designar, es aconsejable que sea la propia Corte la que designe al Tribunal arbitral.

16. Es una buena práctica que la Corte pueda rechazar a los árbitros propuestos por las partes o designados por los otros árbitros que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias de independencia o imparcialidad.
17. La Corte y/o los árbitros deberán motivar siempre y necesariamente la decisión sobre la recusación de un árbitro.
18. Las decisiones sobre recusación convendrá hacerlas públicas, siempre y cuando haya concluido el procedimiento arbitral y siempre que no haya acuerdo de confidencialidad que expresamente lo impida, y no sin antes eliminar los datos personales de los árbitros y las partes.
19. La Corte podrá desempeñar funciones de autoridad nominadora de árbitros y de órgano competente para decidir de sus recusaciones en arbitrajes “ad hoc”. Para que tales atribuciones puedan preverse en los convenios arbitrales, la Corte deberá contar previamente con las oportunas reglas que definan con claridad tales funciones. Tales reglas pueden integrarse en el reglamento de procedimiento o publicarse como reglas independientes.

III. PROCEDIMIENTO

20. El idioma del arbitraje será el que las partes acuerden libremente, sin limitarse al español, pudiendo la Corte determinar, no obstante, que el español sea el idioma del arbitraje en defecto de pacto expreso.
21. Se debe pactar un único idioma común y, a ser posible, neutral, tomando en consideración la sede del arbitraje; la ley aplicable al contrato; el idioma del contrato; el idioma de los documentos y testigos principales; y la disponibilidad de árbitros que dominen el idioma que se pretenda determinar.

22. Como excepción, podrá también acordarse la no necesidad de traducción de documentos al idioma del arbitraje. Esta práctica ahorra tiempo y costes, pero resulta aconsejable únicamente en supuestos en los que los documentos estén redactados en una lengua comúnmente hablada en la contratación internacional.
23. La reconvencción será admisible sólo cuando la relación jurídica objeto de la controversia se sitúe dentro del ámbito de aplicación del convenio arbitral y cuando se dirija únicamente contra el demandante.
24. Constituye una práctica adecuada, aceptar la acumulación de procedimientos arbitrales en curso ante la misma Corte, siempre que ello sea posible en función de los convenios arbitrales de aplicación y que no perjudique a ninguna de las partes, habida cuenta del estado de los procedimientos en curso.
25. Resulta conveniente facultar a los árbitros para que puedan emplazar a nuevas partes, a instancia de cualquiera de las que ya estén en el procedimiento.
26. Es una buena práctica admitir la intervención de terceros que no sean considerados parte demandante o demandada, si los árbitros consideran que su relación o vinculación con el caso lo haga aconsejable y siempre que la cláusula arbitral lo permita.
27. Asimismo, en arbitrajes "ad hoc", internacionales o cuando las partes así lo hayan pactado, es recomendable elaborar un acta de misión; de no proceder el acta de misión, dictar una breve orden procesal; y, en ambos casos, celebrar una audiencia preliminar para fijar los aspectos esenciales del procedimiento, bien en presencia de las partes o sus representantes, bien por

medios que, como la videoconferencia, garanticen la adecuada comunicación.

IV. MEDIDAS CAUTELARES

28. Debe admitirse la posibilidad de adoptar medidas cautelares en cualquier momento y sin que exista un *numerus clausus* de medidas.

V. PRUEBA

29. Es importante establecer la obligación de los árbitros de mantener la confidencialidad sobre los medios de prueba propuestos por las partes y su contenido.
30. Con carácter general, siempre que sea pertinente y con respeto al principio de contradicción, admitir la aportación de documentos en la fase de prueba, sin perjuicio de establecer los límites que se consideren convenientes y de velar porque esta solicitud no se utilice como medio para dilatar innecesariamente el procedimiento o para la obtención de información que vaya más allá del objeto del procedimiento. Con este propósito, es aconsejable limitar la posibilidad de aportar nuevos documentos en las audiencias para la práctica de las declaraciones o en las fases finales del procedimiento, salvo que se acredite justa causa o que su aportación anterior no haya sido posible.
31. En arbitrajes internacionales, se recomienda permitir las declaraciones escritas de los testigos, pudiendo los árbitros convocar a esos testigos, además, a una declaración oral, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes.
32. Permitir a los árbitros llamar a declarar a cuantos testigos y peritos propuestos por las partes consideren oportuno.

VI. EL LAUDO

33. La Corte deberá poder prorrogar el plazo para pronunciar el laudo, si las circunstancias del caso lo requieren y siempre que la legislación aplicable al arbitraje lo permita. Es aconsejable, no obstante, evitar hacer un uso excesivo de esta facultad, así como comunicar de inmediato a todas las partes personadas cualquier decisión de prórroga que pueda adoptarse.
34. Es recomendable prever en el Reglamento criterios sobre la imposición de costas.
35. Es conveniente facultar a las partes a que renuncien a cualquier recurso contra el laudo que, según la ley del lugar del arbitraje, sea renunciable.
36. Se debe limitar la responsabilidad de los árbitros y de la Corte a los casos de dolo.
37. La Corte debe contar con un registro de laudos en el que se deje constancia de los laudos dictados.
38. La Corte debe habilitar y mantener un sistema adecuado para conservar y custodiar el expediente arbitral, devolver a las partes los documentos aportados o destruirlos, si así lo acuerdan las partes, una vez concluido el procedimiento. Es aconsejable que se prevea de antemano la duración de la obligación de conservación y custodia.

VII. REGLAMENTO ARBITRAL MODELO DEL CEA

39. El Club Español del Arbitraje ha aprobado el **Reglamento Modelo** que se adjunta a esta segunda sección de su Código de Buenas Prácticas Arbitrales.

REGLAMENTO ARBITRAL MODELO DEL CEA

I. CUESTIONES GENERALES

1. **Ámbito de aplicación**

Este Reglamento será de aplicación a los arbitrajes administrados por la Corte de *[la institución arbitral de que se trate]*.

2. **Reglas de interpretación**

1. En el presente Reglamento:

- a) la referencia a la Corte se entenderá hecha a la *[la institución arbitral de que se trate]*;
- b) la referencia a los “árbitros” se entenderá hecha al tribunal arbitral, formado por uno o varios árbitros;
- c) las referencias en singular comprenden el plural cuando haya pluralidad de partes;
- d) la referencia al “arbitraje” se entenderá equivalente a “procedimiento arbitral”;
- e) la referencia a “comunicación” comprende toda notificación, interpelación, escrito, carta, nota o información dirigida a cualquiera de las partes, árbitros o a la Corte;
- f) la referencia a “datos de contacto” comprenderá domicilio, residencia habitual, establecimiento, dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

2. Se entenderá que las partes encomiendan la administración del arbitraje a la Corte cuando el convenio arbitral someta la resolución de sus diferencias a “la Corte”, al “Reglamento de la Corte”, a las “reglas de arbitraje de la Corte” o utilicen cualquier otra expresión análoga.

3. La sumisión al Reglamento de Arbitraje se entenderá hecha al Reglamento vigente a la fecha de comienzo del arbitraje, a menos que hayan acordado expresamente someterse al Reglamento vigente a la fecha del convenio arbitral.
4. La referencia a la “Ley de Arbitraje” se entenderá hecha a la legislación sobre arbitraje que resulte de aplicación y que se halle vigente al tiempo de presentarse la solicitud de arbitraje.
5. Si el tribunal arbitral no se hubiera aún constituido, corresponderá a la Corte resolver de oficio o a petición de cualquiera de las partes o de los árbitros, de forma definitiva, cualquier duda que pudiera surgir sobre la interpretación de este Reglamento.

3. Comunicaciones

1. Toda comunicación presentada por una parte, así como los documentos que la acompañen, deberá ir acompañada de tantas copias en papel como partes haya, más una copia adicional para cada árbitro y para la Corte, y una copia en soporte digital. La Corte, a petición de las partes y atendidas las circunstancias del caso, podrá eximir de la necesidad de presentar la copia en formato digital.
2. En su primer escrito, cada parte deberá designar una dirección a efectos de comunicaciones. Todas las comunicaciones que durante el arbitraje deban dirigirse a esa parte se enviarán a esa dirección.
3. En tanto una parte no haya designado una dirección a efectos de comunicaciones, ni esta dirección hubiera sido estipulada en el contrato o convenio arbitral, las comunicaciones a esa parte se dirigirán a su domicilio, establecimiento o residencia habitual.

4. En el supuesto de que no fuera posible averiguar, tras una indagación razonable, ninguno de los lugares a que se refiere el apartado anterior, las comunicaciones a esa parte se dirigirán al último domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección conocida del destinatario.
5. Corresponde al solicitante del arbitraje informar a la Corte sobre los datos enumerados en los apartados 2 y 3 relativos a la parte demandada, hasta que ésta se persone o designe una dirección de comunicaciones.
6. Las comunicaciones se podrán realizar mediante entrega contra recibo, correo certificado, servicio de mensajería, fax o por vía electrónica o cualquier otro medio que deje constancia de la emisión y recepción. Se procurará favorecer la comunicación electrónica.
7. Se considerará recibida una comunicación el día en que haya sido:
 - a) entregada personalmente al destinatario;
 - b) entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección conocida;
 - c) intentada su entrega conforme a lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
8. Las partes pueden acordar que las comunicaciones se efectúen únicamente por vía electrónica utilizando la plataforma de comunicación prevista o habilitada al efecto por la Corte.

4. Plazos

1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente.

2. Toda comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
3. En el cómputo de los plazos no se excluyen los días inhábiles; pero, si el último día de plazo fuera inhábil en la localidad en la que tenga su sede la Corte, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
4. Los plazos establecidos en este Reglamento son, atendidas las circunstancias del caso, susceptibles de modificación (incluyendo su prórroga, reducción o suspensión) por la Corte, hasta la constitución del tribunal arbitral, y por los árbitros, desde ese momento, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes.
5. La Corte velará en todo momento porque los plazos se cumplan de forma efectiva y procurará evitar dilaciones. Este extremo será tenido en cuenta por los árbitros al pronunciarse sobre las costas del arbitraje y por la Corte a la hora de fijar los honorarios finales de los árbitros.

II. COMIENZO DEL ARBITRAJE

5. Solicitud de arbitraje

1. El procedimiento arbitral dará comienzo con la presentación de la solicitud de arbitraje ante la Corte, que dejará constancia de esa fecha en el registro habilitado a tal efecto.
2. La solicitud de arbitraje contendrá, al menos, las siguientes menciones:
 - a) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de la parte o partes demandantes y de la parte o partes demandadas. En particular, deberá

indicar las direcciones a las que deberán dirigirse las comunicaciones a todas esas partes según el artículo 3.

- b) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de las personas que vayan a representar al demandante en el arbitraje.
 - c) Una breve descripción de la controversia.
 - d) Las peticiones que se formulan y, a ser posible, su cuantía.
 - e) El acto, contrato o negocio jurídico del que derive la controversia o con el que ésta guarde relación.
 - f) El convenio arbitral que se invoca.
 - g) Una propuesta sobre el número de árbitros, el idioma y el lugar del arbitraje, si no hubiera acuerdo anterior sobre ello o pretendiera modificarse.
 - h) Si el convenio arbitral prevé el nombramiento de un tribunal de tres miembros, la designación del árbitro que le corresponda elegir, indicando su nombre completo y sus datos de contacto, acompañada de la declaración de independencia e imparcialidad a que se refiere el artículo 10.
3. La solicitud de arbitraje podrá también contener la indicación de las normas aplicables al fondo de la controversia.
4. A la solicitud de arbitraje deberán acompañarse, al menos, los siguientes documentos:
- a) Copia del convenio arbitral o de las comunicaciones que dejen constancia del mismo.

- b) Copia de los contratos, en su caso, de que traiga causa la controversia.
 - c) Escrito de nombramiento de las personas que representarán a la parte en el arbitraje, firmado por ésta.
 - d) Constancia del pago de los derechos de admisión y administración de la Corte y, en su caso, de las provisiones de fondos de los honorarios de los árbitros que sean de aplicación.
5. Si la solicitud de arbitraje estuviese incompleta, las copias o anexos no se presentasen en el número requerido o no se abonaran los derechos de admisión y administración de la Corte o la provisión de fondos de los honorarios de los árbitros, que sean fijados por la Corte, la Corte podrá fijar un plazo para que el demandante subsane el defecto o abone el arancel o la provisión. Subsano el defecto o abonado el arancel o la provisión dentro del plazo concedido, la solicitud de arbitraje se considerará presentada válidamente en la fecha de su presentación inicial.
6. Recibida la solicitud de arbitraje con todos sus documentos y copias; subsanados, en su caso, los defectos de que adoleciera; y abonado el arancel o la provisión requeridos, la Corte remitirá sin dilación al demandado una copia de la solicitud.

6. Respuesta a la solicitud de arbitraje

- 1. El demandado responderá a la solicitud de arbitraje en el plazo de quince días desde su recepción.
- 2. La respuesta a la solicitud de arbitraje contendrá, al menos, las siguientes menciones:

- a) El nombre completo del demandado, su dirección y demás datos relevantes para su identificación y contacto; en particular designará la persona y dirección a la que deberán dirigirse las comunicaciones que deban hacerse durante el arbitraje.
 - b) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de las personas que vayan a representar al demandado en el arbitraje.
 - c) Unas breves alegaciones sobre la descripción de la controversia efectuada por el demandante.
 - d) Su posición sobre las peticiones del demandante.
 - e) Si se opusiera al arbitraje, su posición sobre la existencia, validez o aplicabilidad del convenio arbitral.
 - f) Su posición sobre la propuesta del demandante acerca del número de árbitros, el idioma y el lugar del arbitraje, si no hubiera acuerdo anterior o pretendiera modificarse.
 - g) Si el convenio arbitral prevé el nombramiento de un tribunal de tres miembros, la designación del árbitro que le corresponda elegir, indicando su nombre completo y sus datos de contacto, acompañada de la declaración de independencia e imparcialidad a que se refiere el artículo 10.
 - h) Su posición sobre las normas aplicables al fondo de la controversia, si la cuestión se hubiera suscitado por el demandante.
3. A la respuesta a la solicitud de arbitraje deberán acompañarse, al menos, los siguientes documentos:

- a) El escrito de nombramiento de las personas que representarán a la parte en el arbitraje, firmado por ésta.
 - b) Constancia del pago de los derechos de admisión y administración de la Corte y, en su caso, de las provisiones de fondos de los honorarios de los árbitros que sean de aplicación.
4. Recibida la respuesta a la solicitud de arbitraje con todos sus documentos y copias, y abonados los correspondientes derechos y provisiones de fondos, en la cuantía fijada por la Corte, se remitirá una copia al demandante. La subsanación de los posibles defectos de la contestación se regirá por las previsiones contenidas en el artículo 5.5 de este Reglamento.
5. La falta de presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje dentro del plazo conferido no suspenderá el procedimiento ni el nombramiento de los árbitros.

7. Reconvención

- 1. Si el demandado pretende formular reconvención, deberá anunciarlo en el mismo escrito de contestación a la solicitud de arbitraje.
- 2. El anuncio de reconvención contendrá, al menos, las siguientes menciones:
 - a) Una breve descripción de la controversia.
 - b) Las peticiones que se formularán y, a ser posible, su cuantía.
- 3. Al anuncio de reconvención deberá acompañarse, al menos, constancia del pago de los derechos de la Corte y de las provisiones de fondos de los honorarios de los árbitros, en la cuantía que sea determinada por la Corte.

4. Para ser admisible la reconvencción, y sin perjuicio de los restantes requisitos aplicables, la relación jurídica que constituya su objeto deberá estar comprendida en el ámbito de aplicación del convenio arbitral.
5. Si se ha formulado anuncio de reconvencción, el demandante formulará respuesta preliminar en el plazo de diez días desde su recepción.
6. La respuesta preliminar al anuncio de reconvencción contendrá, al menos, las siguientes menciones:
 - a) Unas breves alegaciones sobre la descripción de la reconvencción efectuada por el demandado reconviniente.
 - b) Su posición sobre las peticiones del demandado reconviniente.
 - c) Su posición sobre la aplicabilidad del convenio arbitral a la reconvencción, en caso de oponerse a la inclusión de la reconvencción en el procedimiento arbitral.
 - d) Su posición sobre las normas aplicables al fondo de la reconvencción, si la cuestión se hubiera suscitado por el demandado reconviniente.

8. Revisión *prima facie* de la existencia de convenio arbitral

En el caso de que la parte demandada no contestase a la solicitud de arbitraje, se negase a someterse al arbitraje o formulara una o varias excepciones relativas a la existencia, validez o alcance del convenio arbitral, podrán darse las siguientes alternativas:

- a) Si la Corte estimase, *prima facie*, la posible existencia de un convenio arbitral de conformidad con el Reglamento, continuará con la tramitación

del procedimiento arbitral (con las reservas sobre la provisión de fondos previstas en este Reglamento), sin perjuicio de la admisibilidad o el fundamento de las excepciones que pudieran oponerse. En este caso, corresponderá a los árbitros tomar toda decisión sobre su propia competencia.

- b) Si la Corte no apreciase, *prima facie*, la posible existencia de un convenio arbitral de conformidad con el Reglamento, notificará a las partes que el arbitraje no puede proseguir.

9. Provisión de fondos para costas

1. La Corte fijará el importe de la provisión de fondos para las costas del arbitraje, incluidos los impuestos que les sean de aplicación.
2. Durante el procedimiento arbitral, la Corte, de oficio o a petición de los árbitros, podrá solicitar provisiones de fondos adicionales a las partes.
3. En los supuestos en que, por formularse reconvencción o por cualquier otra causa, fuera necesario solicitar el pago de provisiones de fondos a las partes en varias ocasiones, corresponderá en exclusiva a la Corte determinar la asignación de los pagos realizados a las provisiones de fondos.
4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el pago de estas provisiones corresponderá al demandante y al demandado por partes iguales. Si alguna de las partes no satisficiera su parte, cualquiera de las otras partes podrá suplir ese pago para que continúe el procedimiento y sin perjuicio del reparto final que proceda.
5. Si, en cualquier momento del arbitraje, las provisiones requeridas no se abonaran íntegramente, la Corte lo pondrá en conocimiento

de las partes para que cualquiera de ellas pueda hacer el pago requerido en el plazo diez días. Si el pago no se efectuara en ese plazo, la Corte rehusará la administración del arbitraje, en cuyo caso, una vez deducida la cantidad que corresponda por gastos de administración, reembolsará a cada parte la cantidad restante que hubiera depositado.

6. Emitido el laudo, la Corte remitirá a las partes una liquidación sobre las provisiones recibidas. El saldo sin utilizar será restituido a las partes, en la proporción que a cada una corresponda.

III. NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS

10. Independencia e imparcialidad

1. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial, y no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial.
2. Antes de su nombramiento o confirmación, la persona propuesta como árbitro deberá suscribir una declaración de independencia e imparcialidad y comunicar por escrito a la Corte cualquier circunstancia que pudiera considerarse relevante para su nombramiento y, especialmente, las que pudieran suscitar dudas sobre su independencia o imparcialidad. La Corte dará traslado de ese escrito a las partes para que, en el plazo de diez días, formulen sus alegaciones al respecto.
3. El árbitro deberá comunicar de inmediato, mediante escrito dirigido tanto a la Corte como a las partes, cualesquiera circunstancias de naturaleza similar que surgieran durante el arbitraje.

4. Las decisiones sobre el nombramiento, confirmación, recusación o sustitución de un árbitro serán firmes.
5. El árbitro, por el hecho de aceptar su nombramiento, se obliga a desempeñar su función hasta su término con diligencia y de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.

11. Número de árbitros y procedimiento de designación

1. Si las partes no hubieran acordado el número de árbitros, la Corte decidirá si procede nombrar un árbitro único o un tribunal arbitral de tres miembros, atendidas todas las circunstancias.
2. Como regla general, la Corte nombrará un árbitro único, a menos que la complejidad del caso o la cuantía de la controversia justifiquen el nombramiento de tres árbitros.
3. Cuando las partes hubieran acordado o, en su defecto, la Corte decidiera que procede nombrar un árbitro único, se dará a las partes un plazo común de veinte días para que acuerden su designación. Pasado este plazo sin que se haya comunicado una designación de común acuerdo, el árbitro único será nombrado por la Corte dentro de los quince días siguientes.
4. Cuando las partes hubieran acordado antes del comienzo del arbitraje el nombramiento de tres árbitros, cada una de ellas, en sus respectivos escritos de solicitud de arbitraje y de respuesta a la solicitud de arbitraje, deberá proponer un árbitro. Si alguna de las partes no propusiera el árbitro que le corresponde en los mencionados escritos, lo designará la Corte en su lugar. El tercer árbitro, que actuará como presidente del tribunal arbitral, será designado por los otros dos árbitros, a los que se conferirá un plazo de

veinte días para que efectúen el nombramiento de común acuerdo. Pasado ese plazo sin que se haya comunicado una designación de común acuerdo, el tercer árbitro será nombrado por la Corte dentro de los quince días siguientes.

5. Si, en defecto de acuerdo de las partes, la Corte decidiera que procede el nombramiento de un tribunal de tres miembros, se dará a las partes un plazo común de quince días para que cada una de ellas designe el árbitro que le corresponda. Pasado este plazo sin que una parte haya comunicado su designación, el árbitro que corresponda a esa parte será nombrado por la Corte. El tercer árbitro se nombrará conforme a lo establecido en el apartado anterior.
6. Los árbitros deberán comunicar su aceptación, en su caso, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la comunicación de la Corte notificándoles su nombramiento.

12. Confirmación o nombramiento por la Corte

1. Al nombrar o confirmar un árbitro, la Corte deberá tener en cuenta la naturaleza y circunstancias de la controversia, la nacionalidad, localización e idioma de las partes, así como la disponibilidad y aptitud de esa persona para llevar el arbitraje de conformidad con el Reglamento.
2. La Corte comunicará a las partes cualquier circunstancia de la que tenga conocimiento respecto de un árbitro designado por las partes, que pueda afectar a su idoneidad o le impida o dificulte gravemente cumplir con sus funciones de conformidad con el Reglamento o dentro de los plazos establecidos.
3. La Corte confirmará a los árbitros designados por las partes o por los otros árbitros, salvo que, a su exclusivo criterio, de la relación de la

persona designada con la controversia, las partes o sus abogados pudieran surgir dudas sobre su idoneidad, disponibilidad, independencia o imparcialidad.

4. Si un árbitro propuesto por las partes o los árbitros no obtuviera la confirmación de la Corte, se dará a la parte o a los árbitros que lo propusieron un nuevo plazo de diez días para proponer otro árbitro. Si el nuevo árbitro tampoco resultara confirmado, la Corte procederá a su designación.
5. En el arbitraje internacional, salvo que las partes tuviesen la misma nacionalidad o dispongan otra cosa, el árbitro único o el árbitro presidente será de nacionalidad distinta a la de las partes, a menos que las circunstancias aconsejen lo contrario y ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo fijado al efecto por la Corte.
6. Cuando corresponda a la Corte designar al árbitro único o al árbitro presidente, la Corte propondrá a las partes una lista de al menos tres candidatos, concediéndoles un plazo común de diez días para que supriman al candidato o candidatos que les merezcan objeción. La Corte designará al árbitro en cuestión de entre los que no hayan sido eliminados por las partes, y, de no ser ello posible, conforme a su propio criterio.

13. Pluralidad de partes

1. Si hay varias partes demandantes o demandadas y procediera el nombramiento de tres árbitros, los demandantes, conjuntamente, propondrán un árbitro, y los demandados, conjuntamente, propondrán otro.
2. A falta de dicha propuesta conjunta y en defecto de acuerdo sobre el método para constituir el tribunal arbitral, la Corte nombrará a los tres árbitros y designará a uno de ellos para que actúe como

presidente. La Corte procederá al nombramiento del tribunal arbitral de conformidad con lo establecido en el apartado 12.6 anterior, debiendo ser la propuesta de al menos 3 candidatos para cada árbitro que deba nombrarse.

14. Acumulación

1. Si una parte presentara una solicitud de arbitraje relativa a una relación jurídica respecto de la cual existiera ya un proceso arbitral regido por el presente Reglamento y pendiente entre las mismas partes, la Corte podrá, a petición de cualquiera de ellas y tras consultar con todas ellas y, en su caso, con los árbitros, acumular la solicitud al procedimiento pendiente. La Corte tendrá en cuenta para ello, entre otros extremos, la naturaleza de las nuevas reclamaciones, su conexión con las formuladas en el proceso ya incoado y el estado en que se hallaran las actuaciones.
2. Si la Corte decidiera acumular la nueva solicitud a un procedimiento pendiente con tribunal arbitral ya constituido, se presumirá que las partes renuncian al derecho que les corresponde de nombrar árbitro con respecto a la nueva solicitud.
3. La decisión de la Corte sobre la acumulación será firme.
4. Los árbitros podrán, a petición de cualquiera de las partes y oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros, que así lo consientan por escrito, como partes en el arbitraje. Asimismo, siempre que la cláusula arbitral lo permita, los árbitros podrán admitir la intervención de terceros previa valoración motivada de su relación o vinculación con el procedimiento.

15. Recusación de árbitros

1. La recusación de un árbitro, fundada en la falta de independencia, imparcialidad o cualquier otro motivo, deberá formularse ante la Corte mediante un escrito en el que se precisarán y acreditarán los hechos en que se funde la recusación.
2. La recusación deberá formularse en el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación del nombramiento o confirmación del árbitro o desde la fecha, si fuera posterior, en que la parte conociera los hechos en que funde la recusación.
3. La Corte dará traslado del escrito de recusación al árbitro recusado y a las restantes partes. Si dentro de los diez días siguientes al traslado, la otra parte o el árbitro aceptasen la recusación, el árbitro recusado cesará en sus funciones y se procederá al nombramiento de otro con arreglo a lo previsto en el artículo 16 de este Reglamento para las sustituciones.
4. Si ni el árbitro ni la otra parte aceptasen la recusación, deberán manifestarlo por escrito dirigido a la Corte en el mismo plazo de diez días y, practicada, en su caso, la prueba que hubiera sido propuesta y admitida, la Corte decidirá motivadamente sobre la recusación.
5. Las costas del incidente de recusación se impondrán a la parte que viera rechazada la recusación que hubiera formulado si los árbitros o la Corte apreciaran mala fe o temeridad en la recusación.

16. Sustitución de árbitros y sus consecuencias

1. Procederá la sustitución de un árbitro en caso de fallecimiento, en caso de renuncia, cuando

prospere su recusación o cuando todas las partes así lo soliciten.

2. Procederá asimismo la sustitución de un árbitro a iniciativa de la Corte o de los demás árbitros, previa audiencia de todas las partes y de los árbitros por término común de diez días, cuando el árbitro no cumpla con sus funciones de conformidad con el Reglamento o dentro de los plazos establecidos, o cuando concurra alguna circunstancia que dificulte gravemente su cumplimiento.
3. Cualquiera que sea la causa por la que haya que nombrar un nuevo árbitro, se hará según las normas reguladoras del procedimiento de nombramiento del árbitro sustituido. Cuando proceda, la Corte fijará un plazo para que la parte a quien corresponda pueda proponer un nuevo árbitro. Si esa parte no propone un árbitro sustituto dentro del plazo conferido, éste será designado por la Corte de conformidad con lo establecido en el apartado 12.6 anterior.
4. En caso de sustitución de un árbitro, como norma general se reanudará el procedimiento arbitral en el momento en el cual el árbitro sustituido dejó de ejercer sus funciones, salvo que el tribunal arbitral o la Corte, en caso de árbitro único, decida de otro modo.
5. Concluidas las actuaciones, en lugar de sustituir a un árbitro la Corte podrá acordar, previa audiencia de las partes y los demás árbitros por término común de diez días, que los árbitros restantes continúen con el arbitraje sin nombramiento de un sustituto.

IV. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

17. Lugar del arbitraje

1. Se entenderá que el lugar del arbitraje es el de la sede de la Corte, salvo que las partes hubieran convenido otra cosa.
2. Por regla general, las audiencias y reuniones se llevarán a cabo en el lugar del arbitraje, si bien los árbitros podrán celebrar reuniones, para deliberación o con cualquier otro objeto, en cualquier otro lugar que consideren oportuno. También podrán, con el consentimiento de las partes, celebrar audiencias fuera del lugar del arbitraje sin que esta circunstancia suponga, por sí misma, un cambio del lugar del arbitraje.
3. El laudo se considerará dictado en el lugar del arbitraje.

18. Idioma del arbitraje

1. El idioma del arbitraje será el español, salvo que las partes hubieran convenido otra cosa.
2. El tribunal arbitral podrá ordenar que cualesquiera documentos que se presenten durante las actuaciones en su idioma original se acompañen de una traducción al idioma del arbitraje.

19. Representación de las partes

Las partes podrán comparecer representadas o asesoradas por personas de su elección. A tal efecto, bastará con que la parte comunique en el escrito correspondiente el nombre de los representantes o asesores, sus datos de contacto y la capacidad en la que actúan. En caso de duda, el tribunal arbitral podrá exigir prueba fehaciente de la representación conferida.

20. Reglas de procedimiento

1. Tan pronto como el tribunal arbitral quede formalmente constituido, y siempre y cuando se hubieran abonado por las partes los anticipos y provisiones requeridos, la Corte entregará el expediente a los árbitros.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, los árbitros podrán dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado, observando siempre el principio de igualdad de las partes y dando a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
3. Las partes, de mutuo acuerdo expresado por escrito, podrán modificar a su conveniencia lo establecido el Título V del presente Reglamento, debiendo los árbitros respetar dichas modificaciones y dirigir el procedimiento de conformidad con lo acordado por las partes.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los árbitros dirigirán y ordenarán el procedimiento arbitral, tras consultar, en su caso, con las partes, mediante órdenes procesales.
5. De todas las comunicaciones, escritos y documentos que una parte traslade al tribunal deberá enviar simultáneamente copia a la otra parte y a la Corte. La misma regla se aplicará a las comunicaciones y decisiones del tribunal arbitral dirigidas a las partes o a alguna de ellas.
6. Todos aquéllos que participen en el procedimiento arbitral actuarán conforme a los principios de confidencialidad y buena fe.

21. Normas aplicables al fondo

1. Los árbitros resolverán con arreglo a las normas jurídicas que las partes hayan elegido, o, en su

defecto, con arreglo a las normas jurídicas que consideren apropiadas.

2. Los árbitros sólo resolverán en equidad, esto es, *ex aequo et bono* o como amigables componedores, si hubiesen sido expresamente autorizados por las partes.
3. En todo caso, los árbitros resolverán con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.

22. Renuncia tácita a la impugnación

Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma de este Reglamento, siguiera adelante con el arbitraje sin denunciar prontamente dicha infracción, se considerará que renuncia a su impugnación.

V. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

23. Primera orden procesal

1. Tan pronto como reciban de la Corte el expediente arbitral y, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, los árbitros dictarán, previa consulta con las partes, una orden procesal en la que se fijarán, como mínimo, las cuestiones siguientes:
 - a) El nombre completo de los árbitros y las partes, y la dirección que hayan designado para comunicaciones en el arbitraje.
 - b) Los medios de comunicación que habrán de emplearse.
 - c) El idioma y el lugar del arbitraje.
 - d) Las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia o, cuando proceda, si debe resolverse en equidad.

- e) El calendario de las actuaciones.
2. Las partes facultan a los árbitros para modificar el calendario de las actuaciones, las veces y con el alcance que consideren necesario, incluso para extender o suspender, si fuera necesario, los plazos inicialmente establecidos dentro de los límites fijados en el apartado 38.2 de este Reglamento.

24. Demanda

1. Establecido el calendario, si en él no se previera otra cosa, los árbitros concederán al demandante un plazo de treinta días para interponer la demanda.
2. En la demanda hará constar el demandante:
 - a) Las peticiones concretas que formula.
 - b) Los hechos y fundamentos jurídicos en que funde sus peticiones.
 - c) Una relación de las pruebas de que pretenda valerse.
3. Asimismo, a la demanda se acompañarán todos los documentos, declaraciones de testigos e informes periciales que se pretendan hacer valer en apoyo de las peticiones deducidas.

25. Contestación a la demanda

1. Del escrito de demanda se dará traslado a la otra parte para que, en el plazo que se hubiera fijado en el calendario o, en su defecto, en el plazo de treinta días, puedan presentar contestación a la demanda, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo anterior para la demanda.
2. La falta de contestación a la demanda no impedirá la regular prosecución del arbitraje.

26. Reconvención

1. En el mismo escrito de contestación a la demanda, o en uno separado, si así se hubiera previsto, y siempre que lo hubiera anunciado oportunamente, el demandado podrá formular reconvención, la cual deberá ajustarse a lo establecido para la demanda.
2. Del escrito de reconvención se dará traslado a la otra parte para que, en el plazo que se hubiera fijado en el calendario o, en su defecto, en el plazo de veinte días, puedan presentar contestación a la reconvención, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto para el escrito de demanda.

27. Nuevas reclamaciones

La formulación de nuevas reclamaciones requerirá la autorización de los árbitros, quienes, al decidir al respecto, tendrán en cuenta la naturaleza de las nuevas reclamaciones, el estado en que se hallen las actuaciones y todas las demás circunstancias que fueran relevantes.

28. Otros escritos

Los árbitros decidirán si se requiere que las partes presenten otros escritos, además de los de demanda y contestación, tales como réplica y dúplica, y fijarán los plazos para su presentación.

29. Pruebas

1. Contestada la demanda o, en su caso, la reconvención, se concederá a las partes un plazo común de diez días para que propongan cuantas pruebas adicionales vayan a precisar en apoyo de las peticiones deducidas. El tribunal arbitral podrá sustituir este trámite escrito por una audiencia, que se celebrará en todo caso si lo solicitaran todas las partes.

2. Cada parte asumirá la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus peticiones o defensas.
3. Corresponde a los árbitros decidir, mediante orden procesal, sobre la admisión, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas o acordadas de oficio.
4. La práctica de prueba se desarrollará sobre la base del principio de que cada parte tiene derecho a conocer con razonable anticipación las pruebas en que la otra parte basa sus alegaciones.
5. En cualquier momento de las actuaciones, los árbitros podrán recabar de las partes documentos u otras pruebas, cuya aportación habrá de efectuarse dentro del plazo que se determine al efecto.
6. Si una fuente de prueba estuviera en poder o bajo el control de una parte, y ésta rehusara injustificadamente presentarla o dar acceso a ella, los árbitros podrán extraer de esa conducta las conclusiones que estimen procedentes sobre los hechos objeto de prueba.
7. Los árbitros valorarán la prueba libremente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

30. Audiencias

1. Los árbitros podrán resolver la controversia sobre la sola base de los documentos y restante prueba aportada por las partes, salvo si alguna de ellas solicitara la celebración de una audiencia.
2. Para celebrar una audiencia, el tribunal arbitral convocará a las partes con antelación razonable para que comparezcan el día y en el lugar que determine.

3. Podrá celebrarse la audiencia aunque una de las partes, convocada con la debida antelación, no compareciera sin acreditar justa causa.
4. La dirección de las audiencias corresponde en exclusiva al tribunal arbitral.
5. Con la debida antelación y tras consultar con las partes, los árbitros, mediante la emisión de una orden procesal, establecerán las reglas conforme a las cuales se desarrollará la audiencia, la forma en que habrá de interrogarse a los testigos o peritos y el orden en que serán llamados.
6. Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada, a menos que las partes acuerden lo contrario.

31. Testigos

1. A los efectos del presente Reglamento, tendrá la consideración de testigo toda persona que preste declaración sobre su conocimiento de cualquier cuestión de hecho, sea o no parte en el arbitraje.
2. Los árbitros podrán disponer que los testigos presten declaración por escrito, sin perjuicio de que pueda disponerse además un interrogatorio ante los árbitros y en presencia de las partes, en forma oral o por algún medio de comunicación que haga innecesaria su presencia. La declaración oral del testigo habrá de llevarse a cabo siempre que lo requiera una de las partes y así lo acuerden los árbitros.
3. Si un testigo llamado a comparecer en una audiencia para interrogatorio no compareciera sin acreditar justa causa, los árbitros podrán tener en cuenta este hecho en su valoración de la prueba y, en su caso, tener por no prestada la declaración escrita, según estimen apropiado en atención a las circunstancias.

4. Todas las partes podrán hacer al testigo las preguntas que estimen convenientes, bajo el control de los árbitros sobre su pertinencia y utilidad. Los árbitros también podrán formular preguntas al testigo en cualquier momento.

32. Peritos

1. Los árbitros, tras consultar a las partes, podrán nombrar uno o más peritos, que deberán ser y permanecer independientes e imparciales de las partes durante el curso del arbitraje, para que dictaminen sobre cuestiones concretas.
2. Los árbitros estarán asimismo facultados para requerir a cualquiera de las partes para que pongan a disposición de los peritos designados por los árbitros información relevante o cualesquiera documentos, bienes o pruebas que deban examinar.
3. Los árbitros darán traslado a las partes del dictamen del perito designado por el tribunal arbitral para que aleguen lo que estimen conveniente sobre el dictamen en la fase de conclusiones. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito invoque en su dictamen.
4. Presentado su dictamen, todo perito, nombrado por las partes o por los árbitros, deberá comparecer, si lo solicita cualquiera de las partes y siempre que los árbitros lo consideren oportuno, en una audiencia en la que las partes y los árbitros podrán interrogarle sobre el contenido de su dictamen. Si los peritos hubieran sido nombrados por los árbitros, las partes podrán, además, presentar otros peritos para que declaren sobre las cuestiones debatidas.
5. El interrogatorio de los peritos podrá hacerse sucesiva o simultáneamente, a modo de careo, según dispongan los árbitros.

6. Los honorarios y gastos de todo perito nombrado por el tribunal arbitral se considerarán gastos del arbitraje.

33. Conclusiones

1. Concluida la audiencia o, si el procedimiento fuera sólo escrito, recibido el último escrito de parte, el tribunal arbitral, en el plazo que se hubiera fijado en el calendario o, en su defecto, en el plazo de quince días, dará traslado a las partes para que, por escrito y de forma simultánea, presenten sus conclusiones.
2. El tribunal arbitral podrá sustituir el trámite de conclusiones escritas por conclusiones orales en una audiencia, que se celebrará en todo caso a solicitud de todas las partes.

34. Impugnación de la competencia del tribunal arbitral

1. Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia.
2. A este efecto, un convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará por sí sola la invalidez del convenio arbitral.
3. Como regla general, las objeciones a la competencia de los árbitros deberán formularse en la respuesta a la solicitud de arbitraje o, a más tardar, en la contestación a la demanda o, en su caso, a la reconvencción, y no suspenderán el curso de las actuaciones.

4. Como regla general, las objeciones a la competencia de los árbitros se resolverán como cuestión previa y mediante laudo, previa audiencia de todas las partes, si bien podrán también resolverse en el laudo final, una vez concluidas las actuaciones.

35. Rebeldía

1. Si el demandante no presentara la demanda en plazo sin invocar causa suficiente, se darán por concluidas las actuaciones.
2. Si el demandado o el demandante reconvenido no presentaran la contestación en plazo sin invocar causa suficiente, se ordenará la prosecución de las actuaciones.
3. Si una de las partes, debidamente convocada, no compareciera a la audiencia sin invocar causa suficiente, los árbitros estarán facultados para proseguir el arbitraje.
4. Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos, no lo hiciera en los plazos fijados sin invocar causa suficiente, los árbitros podrán dictar el laudo basándose en las pruebas de que dispongan.

36. Medidas cautelares

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias, ponderando las circunstancias del caso y, en particular, la apariencia de buen derecho, el riesgo en la demora y las consecuencias que puedan derivarse de su adopción o desestimación. La medida deberá ser proporcional al fin perseguido y lo menos gravosa posible para alcanzarlo.

2. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante, incluso mediante contragarantía avalada de una forma que el tribunal estime suficiente.
3. Los árbitros resolverán sobre las medidas solicitadas previa audiencia de todas las partes interesadas.
4. La adopción de medidas cautelares podrá revestir la forma de orden procesal o, si así lo pidiera alguna de las partes, de laudo.

37. Cierre de la instrucción del procedimiento

Los árbitros declararán el cierre de la instrucción cuando consideren que las partes han tenido oportunidad suficiente para hacer valer sus derechos. Después de esa fecha no podrá presentarse ningún escrito, alegación o prueba, salvo que los árbitros, en razón de circunstancias excepcionales, así lo autoricen.

VI. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y EMISIÓN DEL LAUDO

38. Plazo para dictar el laudo

1. Si las partes no hubieran dispuesto otra cosa, los árbitros resolverán sobre las peticiones formuladas dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o, en su caso, a la contestación a la reconvencción.
2. Mediante la sumisión a este Reglamento las partes delegan en los árbitros la facultad de prorrogar el plazo para dictar el laudo por un período no superior a tres meses para concluir adecuadamente su misión. Los árbitros velarán para que no se produzcan dilaciones. En todo caso, el plazo para dictar laudo podrá ser prorrogado por acuerdo de todas las partes.

3. Si un árbitro fuera sustituido en el último mes del plazo para dictar laudo, éste quedará prorrogado automáticamente por treinta días adicionales. En el caso de que la sustitución haga necesario repetir algunas actuaciones del procedimiento, el plazo para dictar laudo se prorrogará automáticamente, además de en los treinta días adicionales antes señalados, por el mismo tiempo en su día consumido para practicar las actuaciones que hubieran de repetirse.

39. Forma, contenido y comunicación del laudo

1. Los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios. Todo laudo se considerará pronunciado en el lugar del arbitraje y en la fecha que en su texto se mencione.
2. Si el tribunal es colegiado, el laudo se adoptará por mayoría de los árbitros. Si no hubiera mayoría, decidirá el presidente.
3. El laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Si el tribunal es colegiado, bastarán las firmas de la mayoría de los árbitros o, en su defecto, la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de esas firmas.
4. El laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo por acuerdo de las partes.
5. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje. Cualquier condena en costas deberá ser motivada.
6. Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, como regla general la condena en costas deberá reflejar el éxito y el fracaso de

las respectivas pretensiones de las partes, salvo que, atendidas las circunstancias del caso, los árbitros estimaran inapropiada la aplicación de este principio general.

7. El laudo se emitirá en tantos originales como partes hayan participado en el arbitraje y un original adicional, que quedará depositado en el archivo habilitado al efecto por la Corte.
8. El laudo podrá protocolizarse si alguna de las partes así lo solicita, siendo a su cargo todos los gastos necesarios para ello.
9. Los árbitros notificarán el laudo a las partes a través de la Corte mediante la entrega a cada una de ellas, en la forma establecida en el artículo 3, de un ejemplar firmado. La misma regla se aplicará a cualquier corrección, aclaración o complemento del laudo.

40. Laudo por acuerdo de las partes

Si durante el procedimiento arbitral las partes llegan a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente a la controversia, los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos convenidos y, si ambas partes lo solicitan, y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes.

41. Examen previo del laudo por la Corte

1. Antes de firmar el laudo, los árbitros lo someterán a la Corte, que podrá, dentro de los diez días siguientes, proponer modificaciones estrictamente formales.
2. Igualmente la Corte podrá, respetando en todo caso la libertad de decisión de los árbitros, llamar su atención sobre aspectos relacionados con

el fondo de la controversia, así como sobre la determinación y desglose de las costas.

3. El examen previo del laudo por la Corte no supondrá en ningún caso que ésta asuma responsabilidad alguna sobre el contenido del laudo.

42. Corrección, aclaración y complemento del laudo

1. Dentro de los diez días siguientes a la comunicación del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá solicitar a los árbitros:
 - a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar.
 - b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.
 - c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él.
2. Oídas las demás partes por término de diez días, los árbitros resolverán lo que proceda mediante laudo en el plazo de veinte días.
3. Dentro de los plazos previstos en los apartados anteriores, los árbitros podrán proceder de oficio a la corrección de errores a que se refiere el párrafo a) del apartado 1.

43. Eficacia del laudo

1. El laudo es obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplirlo sin demora.
2. Si en el lugar del arbitraje fuera posible plantear algún recurso sobre el fondo o sobre algún punto de la controversia, se entenderá que, al someterse a este Reglamento arbitral, las partes renuncian

a esos recursos, siempre que legalmente quepa esa renuncia.

44. Otras formas de terminación

El procedimiento arbitral podrá también terminar:

- a) Por desistimiento del demandante, a menos que el demandado se oponga a ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una resolución definitiva del litigio.
- b) Cuando las partes así lo dispongan de mutuo acuerdo.
- c) Cuando, a juicio de los árbitros, la prosecución de las actuaciones resulte innecesaria o imposible.

45. Custodia y conservación del expediente arbitral

- 1. Corresponderá a la Corte la custodia y conservación del expediente arbitral, una vez dictado el laudo.
- 2. Transcurrido un año desde la emisión del laudo, y previo aviso a las partes o a sus representantes para que en el plazo de quince días puedan solicitar el desglose y entrega, a su costa, de los documentos por ella presentados, cesará la obligación de conservación del expediente y sus documentos, a excepción de una copia del laudo y de las decisiones y comunicaciones de la Corte relativas al procedimiento, que se conservarán en el archivo habilitado por la Corte a tal efecto.
- 3. Mientras esté en vigor la obligación de la Corte de custodia y conservación del expediente arbitral, cualquiera de las partes podrá solicitar el desglose y entrega, a su costa, de los documentos originales que hubiera aportado.

46. Costas

Las costas del arbitraje se fijarán en el laudo final y comprenderán:

- a) Los derechos de admisión y administración de la Corte, con arreglo al Anexo A (Derechos de la Corte) y, en su caso, los gastos de alquiler de instalaciones y equipos para el arbitraje;
- b) Los honorarios y gastos de los árbitros, que fijará o aprobará la Corte de conformidad con el Anexo B (Honorarios y gastos de los árbitros);
- c) Los honorarios de los peritos nombrados, en su caso, por el tribunal arbitral; y
- d) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.

47. Honorarios de los árbitros

1. La Corte fijará los honorarios de los árbitros con arreglo al Anexo B (Honorarios y gastos de los árbitros), teniendo en cuenta el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias relevantes, en particular la conclusión anticipada del procedimiento arbitral por acuerdo de las partes o por cualquier otro motivo y las eventuales dilaciones en la emisión del laudo.
2. La corrección, aclaración o complemento del laudo previstos en el artículo 42 no devengarán honorarios adicionales.

48. Confidencialidad

1. Salvo acuerdo contrario de las partes, la Corte y los árbitros están obligados a guardar confidencialidad sobre el arbitraje y el laudo.

2. Los árbitros podrán ordenar las medidas que estimen convenientes para proteger secretos comerciales o industriales o cualquier otra información confidencial.
3. Las deliberaciones del tribunal arbitral son confidenciales.
4. Podrá publicarse un laudo si concurren las condiciones siguientes:
 - a) que se presente en la Corte la correspondiente solicitud de publicación o la propia Corte considere que concurre un interés doctrinal;
 - b) que se supriman todas las referencias a los nombres de las partes y los datos que las puedan identificar fácilmente; y
 - c) que ninguna de las partes en el arbitraje se oponga a esta publicación dentro del plazo fijado a tal efecto por la Corte.

49. Responsabilidad

Ni la Corte ni los árbitros serán responsables por acto u omisión alguno relacionado con un arbitraje administrado por la Corte, salvo que se acredite dolo por su parte.

50. Procedimiento abreviado

1. Las partes podrán acordar que el procedimiento arbitral se rija con arreglo al procedimiento abreviado establecido en el presente artículo, y que modifica al régimen general en los siguientes extremos:
 - a) La Corte podrá reducir los plazos para el nombramiento de los árbitros.
 - b) Si las partes solicitaran prueba distinta de la documental, se celebrará una sola audiencia para la práctica de la prueba testifical y de

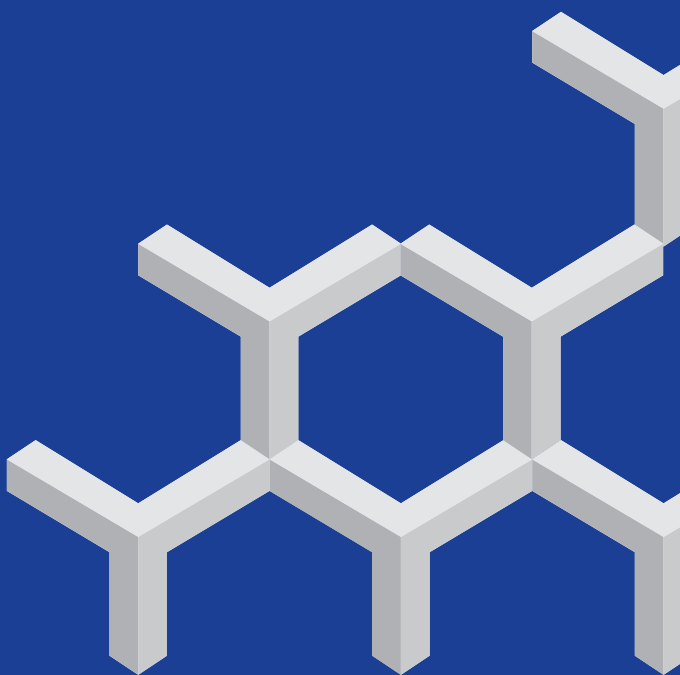
peritos, así como para las conclusiones orales.

- c) Los árbitros dictarán laudo dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o la contestación a la reconvencción. Los árbitros sólo podrán prorrogar el plazo para dictar laudo por un único plazo adicional de dos meses.
 - d) Se nombrará un árbitro único, salvo que el convenio de arbitraje hubiera estipulado la elección de un tribunal arbitral. En caso de árbitro único, la Corte invitará a las partes a acordar su nombramiento.
2. Además de por acuerdo de las partes, el procedimiento abreviado se aplicará, por decisión de la Corte, a todos los casos en los que la cuantía total del procedimiento (incluyendo, en su caso, la reconvencción) no exceda los cien mil euros o la cuantía equivalente que, como actualización, pueda ser fijada por la Corte, siempre y cuando no concurren circunstancias que, a juicio de la Corte, aconsejen la utilización del procedimiento ordinario. La decisión de tramitar un expediente arbitral por el procedimiento abreviado será firme.

Disposición transitoria

Este Reglamento entrará en vigor el *[fecha]*, quedando desde entonces sin efecto el Reglamento anterior. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el presente Reglamento se aplicará a todo arbitraje cuya solicitud haya sido presentada a partir del día de su entrada en vigor.

Code of Good Arbitration Practice
from the Club Español del Arbitraje



cea

www.clubarbitraje.com

**CODE OF GOOD ARBITRATION
PRACTICE FROM THE
SPANISH ARBITRATION CLUB**

FOREWORD

The strength of arbitration as a dispute resolution mechanism lies in its ability to take decisions that are considered by the parties to be impartial. To a large extent, this perception of impartiality stems from the proper handling of the arbitration proceeding. In this respect, there is greater likelihood of voluntary compliance with an award if the losing party recognizes that the arbitrators conducted the proceeding with a firm hand and in a neutral way. As the old saying goes, in arbitration, a proceeding is only as good as its arbitrators.

In this process of instilling confidence, the administrative institutions for arbitration (“arbitral institutions”) also have a decisive role to play. Arbitral institutions interact directly with the parties, their representatives and arbitrators on a daily basis with the intention of bringing disputes to an end successfully. If arbitral institutions did not regulate their contacts according to strict ethical and professional standards, the arbitration proceeding could be adversely affected by the existence of doubts as to the neutrality of their actions, e.g. in appointing arbitrators, during proceedings for challenge or even in the selection of the place of arbitration; all are critical moments during an arbitration proceeding.

In view of this clear need, and supported by the prevailing consensus in the Spanish legal community on the necessity to encourage the use of arbitration, the Spanish Arbitration Club (*Club Español del Arbitraje*) hereby presents the first part of the CEA Code of Good Arbitration Practice. The Code comprises various sections, each dealing exclusively with a specific aspect of arbitration practice. Each section contains a non-exhaustive list of recommendations that may become duties for any institutions that choose to adopt them.

The Code is open to all contributions that represent a step towards achieving a body of arbitration best

practices. The aim is therefore to place the emphasis on its clear adaptability to change in the future, which is also part of the reason behind the decision of the SPANISH ARBITRATION CLUB'S ARBITRATION BEST PRACTICES COMMITTEE to set up an internal CONSULTATIVE COMMISSION as a point of reference for all those involved in arbitration.

Section One¹ of the Code, presented next, is addressed to ARBITRAL INSTITUTIONS. It aims to bring together some of the ethical duties and principles that arbitral institutions could observe in order to contribute to strengthening existing confidence in arbitration as an effective alternative to the courts. The success of any arbitral institution relies, to a large extent, on the irreproachable conduct of everyone working on the inside. This is a shared responsibility that can lead to a successful outcome through strict observance of professional conduct rules. We are confident that this first section of the Code will contribute to achieving this goal.

ARBITRATION BEST PRACTICES COMMITTEE
SPANISH ARBITRATION CLUB
DECEMBER 2005

1 The Arbitration Best Practices Committee appointed a panel to draft the first section of the Code of Good Arbitration Practice made up of José Antonio Caínzos, Luis Felipe Castresana, Mercedes Fernández, Vicente Sierra and Miguel Virgós, and chaired by Jesús Remón. The panel's draft was approved by the Club's Management Committee.

CONTENTS

SECTION ONE. ARBITRAL INSTITUTIONS

RECOMMENDATIONS	11
CEA CODE OF GOOD ARBITRATION PRACTICE ARBITRAL INSTITUTIONS.....	12
I. QUALITY OF SERVICES	
Duty 1: Rules	12
Duty 2: Self-Assessment	12
Duty 3: Adoption of Best Practices	12
II. INSTITUTIONAL INDEPENDENCE	
Duty 4: Advice.....	13
Duty 5: Self-Appointment.....	13
Duty 6: Conflict of Interest	13
Duty 7: Sources of Remuneration.....	13
III. TRANSPARENCY	
Duty 8: Legal Regime and Funding	14
Duty 9: Nature and Scope of Services.....	14
Duty 10: Bodies and Procedures.....	14
Duty 11: List of Arbitrators.....	14
Duty 12: Appointment and Removal of Arbitrators	15
Duty 13: Costs of the Arbitration	15
IV. SPEED	
Duty 14: Time Limits	15
Duty 15: Use of Suitable Resources.....	16
V. FLEXIBILITY	
Duty 16: Adaptation of Rules	16
VI. OBJECTIVE SELECTION OF ARBITRATORS	
Duty 17: Paramountcy of the Parties' Wishes....	16
Duty 18: Qualifications of Arbitrators	16
Duty 19: Availability of Arbitrators	17
Duty 20: Independence and Impartiality of Arbitrators	17
Duty 21: Discharge of Functions.....	17

VII. CONFIDENTIALITY	
Duty 22: Identity of the Parties and Substance of the Dispute	18
Duty 23: Custody of Documentation	18
Duty 24: Keeping of Case Files	18
Duty 25: Register and Record of Awards.....	19
Duty 26: Publication of Awards	19

VIII. PROMOTION	
Duty 27: Training	19
Duty 28: Dissemination.....	19

REFERENCES.....	21
-----------------	----

SECTION TWO: RULES OF ARBITRATION INSTITUTIONS

RECOMMENDATIONS	26
I. THE ARBITRAL AGREEMENT.....	26
II. APPOINTMENT OF ARBITRATORS.....	27
III. PROCEDURE.....	28
IV. INTERIM MEASURES.....	30
V. EVIDENCE	30
VI. THE AWARD.....	31
VII. CEA MODEL RULES OF ARBITRATION	31

CEA MODEL RULES OF ARBITRATION

I. GENERAL ISSUES	
1. Scope of Application.....	32
2. Interpretation	32
3. Communications	33
4. Time Limits	34
II. COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION	
5. Request for Arbitration	35
6. Answer to the Request for Arbitration	37
7. Counterclaim	39

8.	<i>Prima Facie</i> Review of the Existence of an Arbitration Agreement	40
9.	Advance to Cover Costs	41
III. APPOINTMENT OF THE ARBITRATORS		
10.	Independence and Impartiality	42
11.	Number of Arbitrators and Appointment Procedure.....	43
12.	Confirmation or Appointment by the Court..	44
13.	Multiple Parties.....	45
14.	Joinder	46
15.	Challenge of Arbitrators.....	47
16.	Replacement of Arbitrators and Effects.....	48
IV. THE ARBITRATION PROCEEDING		
GENERAL PROVISIONS		
17.	Place of the Arbitration	48
18.	Language of the Arbitration	49
19.	Representation of the Parties.....	49
20.	Rules Governing the Proceeding	49
21.	Applicable Rules of Law	50
22.	Implied Waiver of Challenge	50
V. CONDUCT OF THE PROCEEDING		
23.	First Procedural Order.....	51
24.	The Claim.....	51
25.	Answer to the Claim	52
26.	Counterclaim	52
27.	New Claims	52
28.	Other Submissions.....	53
29.	Evidence	53
30.	Hearings.....	54
31.	Witnesses.....	54
32.	Experts	55
33.	Closing Submissions.....	56
34.	Challenge to the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal	56
35.	Default.....	58
36.	Conservatory and Interim Measures	58
37.	Closing of the Proceeding	58

VI. CONCLUSION OF THE PROCEEDING AND RENDERING OF THE AWARD	
38. Time Limit for Making the Award	58
39. Form, Substance and Notification of the Award	59
40. Award by Consent	60
41. Prior Scrutiny of the Award by the Court	61
42. Correction and Clarification of, and Supplement to, the Award	61
43. Validity of the Award	62
44. Other Forms of Conclusion	62
45. Custody and Keeping of the Arbitration File	62
46. Costs	63
47. Arbitrators' Fees	63
48. Confidentiality	64
49. Liability	64
50. Expedited Procedure.....	65

SECTION ONE
ARBITRAL INSTITUTIONS

RECOMMENDATIONS

- I. **QUALITY OF SERVICE.** Arbitral institutions should provide their services in an objective, efficient and responsible way.
- II. **INSTITUTIONAL INDEPENDENCE.** Arbitral institutions should conduct themselves in an independent and neutral fashion in the administration of arbitration proceedings.
- III. **TRANSPARENCY.** Arbitral institutions should provide full and transparent information on the institution, its services and the internal procedures followed in the administration of arbitration proceedings.
- IV. **SPEED.** Arbitral institutions should take steps to expedite the conduct of the cases they administer.
- V. **FLEXIBILITY.** Arbitral institutions should agree to the adaptation of their rules in the cases they administer.
- VI. **OBJECTIVE SELECTION OF ARBITRATORS.** Arbitral institutions should use objective criteria in the selection and appointment of arbitrators.
- VII. **CONFIDENTIALITY.** Arbitral institutions should protect the privacy and confidentiality of the cases they administer.
- VIII. **PROMOTION.** Arbitral institutions should promote arbitration for the resolution of disputes.

CEA CODE OF GOOD ARBITRATION PRACTICE

ARBITRAL INSTITUTIONS

I. QUALITY OF SERVICES

Arbitral institutions should provide their services in a professional, efficient and responsible way.

Duty 1: Rules

Arbitral institutions should administer their proceedings on the basis of up-to-date rules that are tailored to meet the needs of business and reflect the evolution of arbitration practices².

Duty 2: Self-assessment

Arbitral institutions should endeavor to review, assess and, if possible, certify from time to time the quality of their internal procedures³.

Duty 3: Adoption of best practices

Arbitral institutions should endeavor to observe best practices in the management of cases entrusted to them, through the voluntary adoption of this Code.

2 On the basis of this obligation, arbitral institutions should establish working groups to monitor permanently the validity and updating of the rules.

3 The way of doing so will depend on the specific resources and circumstances of each institution and may range from making complaint/feedback forms available, implementing periodic self-assessment mechanisms, to external certification. Arbitral institutions should send the parties and arbitrators involved in proceedings under their administration a questionnaire that allows the latter to evaluate the former's service and identify potential problems or needs.

II. INSTITUTIONAL INDEPENDENCE

Arbitral institutions should conduct themselves in an independent and neutral fashion in the administration of arbitration proceedings.

Duty 4: Advice

Under no circumstances whatsoever should an arbitral institution offer legal advice on issues that are or may be the subject of an arbitration proceeding administered by that institution⁴. In the same vein, the arbitral institution should not, under any circumstances, make any recommendation on the provision of legal services by specific lawyers or legal firms.

Duty 5: Self-appointment

Arbitral institutions should avoid the appointment as arbitrators of persons holding administration, executive or management positions in the institution, or persons who are members of their governing bodies, unless such persons are appointed by mutual agreement between the parties or the Rules so permit. In these cases, appointments should be limited to the position of sole arbitrator or chairperson of the arbitral tribunal. The same duty should apply to their employees.

Duty 6: Conflict of interest

Arbitral institutions should inform the parties of any situation that may give rise to doubts as to their independence or impartiality.

Duty 7: Sources of remuneration

Arbitral institutions should be responsible for ensuring that, in cases under their administration, none of their personnel receive remuneration or fees of any kind from the parties. This duty includes a prohibition on working for the members of the arbitral tribunal for

⁴ The preparation of reports or opinions should be regarded as legal advice.

additional fees, without the express consent of the parties⁵.

III. TRANSPARENCY

Arbitral institutions should provide full and transparent information on the institution, its services and the internal procedures followed by the institution in the administration of arbitration proceedings.

Duty 8: Legal regime and funding

Arbitral institutions should make public information on their legal status, system of internal governance, and their principal sources of funding, including the entities, organizations, enterprises or institutions that sponsor their activities.

Duty 9: Nature and scope of services

Arbitral institutions should make public the characteristics, nature and scope of their services⁶. This duty includes information on any service specialization in certain sectors or areas of the economy.

Duty 10: Bodies and procedures

Arbitral institutions should provide information on the bodies and procedures through which they exercise the powers of administration conferred on them by their rules.

Duty 11: List of arbitrators

If the arbitral institution has a list of arbitrators, it should make public the selection criteria and

⁵ This includes an express prohibition on accepting gifts, gratuities or bonuses, regardless of their nature and/or economic value, from lawyers, arbitrators or any other person related to the conduct of the proceeding.

⁶ It is understood that such information should be provided *before* accepting the administration of an arbitration and any omission in this respect would be the responsibility of the arbitral institutions.

procedure established to be admitted to that list⁷.

Duty 12: Appointment and removal of arbitrators

Arbitral institutions should make public the criteria that they follow in the appointment, challenge and removal of arbitrators.

Duty 13: Costs of the arbitration

Arbitral institutions should be duty-bound to make public their fees for administration and (if any) admission, as well as the arbitrators' fees and the costs of other services related to the arbitration proceeding⁸. The fees and costs of arbitral institutions should have regard to the principle of moderation and should vary depending on the quantum and complexity of the cases.

IV. SPEED

Arbitral institutions should take steps to expedite the cases they administer.

Duty 14: Time limits

Arbitral institutions should ensure that the time limits set in their rules are actually met and should endeavor to avoid undue delay⁹.

7 Notwithstanding the special conditions set forth in the arbitral institution's rules or bylaws, the lists should be open and, provided that the requisite conditions are met, no professional should be refused admission for reasons other than those related to their aptitude, ability and probity to act as an arbitrator.

8 Related services are considered to include, *inter alia*, the use of premises and equipment, the recording of hearings and interpretation services where provided by the institution itself. This information duty includes the duty to give reasonable notice of any variation or modification in the prices of its services. Such modification cannot, in any event, be applied to proceedings that have already commenced.

9 This duty should also have as its goal and limit the parties' best interests. Failure by an appointed arbitrator to perform his duties within a reasonable time constitutes cause for removal.

Duty 15: Use of suitable resources

Arbitral institutions should support the use of the technologies and means of communication that best meet the objective of resolution, within a reasonable time, of the cases administered, and should encourage simultaneous communications between the parties and the arbitral institution.

V. FLEXIBILITY

Arbitral institutions should agree to the adaptation of their rules in the cases they administer.

Duty 16: Adaptation of rules

Where the parties have so agreed, arbitral institutions should allow their rules to be tailored to the circumstances of the case. This flexibility should, at all times, safeguard the effective protection of the parties' rights, including the procedural safeguards of equality, the right to a hearing and a right of reply.

VI. OBJECTIVE SELECTION OF ARBITRATORS

Arbitral institutions should apply objective criteria to the selection and appointment of arbitrators.

Duty 17: Paramountcy of the parties' wishes

Arbitral institutions should respect the wishes of the parties in the constitution of the arbitral tribunal, subject to the limits of the conditions concerning professional qualifications and personal aptitude required by the institution in its appointments¹⁰.

Duty 18: Qualifications of arbitrators

Arbitral institutions should be duty-bound to ensure that the arbitrators appointed by them have the most appropriate experience and technical and/or

¹⁰ Arbitral institutions should appoint arbitrators directly, using lists or respecting the parties' appointment, as the case may be.

professional qualifications for resolving the issues in dispute¹¹. Experience as an arbitrator should be, in all cases, absolutely necessary to be appointed as a presiding arbitrator or sole arbitrator¹².

Duty 19: Availability of arbitrators

Arbitral institutions should ensure that the arbitrators they appoint have the necessary time to conclude the arbitration proceeding in due time and to the required standard¹³.

Duty 20: Independence and impartiality of arbitrators

Arbitral institutions should require each arbitrator to make a statement on their independence and impartiality in which they disclose, and undertake to disclose without delay during the proceeding, any circumstance that may give rise to justifiable doubts as to their independence or impartiality from the parties' perspective¹⁴. Arbitral institutions should make provision in their rules for expeditious challenge proceedings.

Duty 21: Discharge of functions

Arbitral institutions should ensure that arbitrators acting under their rules discharge their functions

11 The mechanisms and procedures for ensuring compliance with this duty and the parameters used to assess the arbitrators' credentials should be determined by the arbitral institutions themselves.

12 The arbitral institution should have discretion in assessing the experience of a prospective arbitrator to be able to conduct an arbitration in accordance with its rules.

13 The criteria established to assess this point should ensure that arbitrators are materially in a position to examine and assess all the parties' claims in a reasonable way. The institution should, at all times, avoid appointing arbitrators with an excessive workload.

14 The institutions should be responsible for implementing the mechanisms and procedures necessary to provide assurance to the parties that the arbitrators comply with their duty of transparency.

correctly¹⁵. An arbitrator should be replaced when it is established that there is an obstacle preventing him from complying with his functions or the arbitrator fails to comply with the rules. For that purpose, arbitral institutions should make provision for the appropriate removal procedure in their rules.

VII. CONFIDENTIALITY

Arbitral institutions should protect the privacy and confidentiality of the cases they administer¹⁶.

Duty 22: Identity of the parties and substance of the dispute

Arbitral institutions should act with complete discretion as to the identity of the parties and the substance of the disputes they administer¹⁷.

Duty 23: Custody of documentation

Arbitral institutions should establish mechanisms to safeguard the confidentiality of the documents and information submitted to proceedings.

Duty 24: Keeping of case files

Arbitral institutions should keep documentation from proceedings for a reasonable period of time and, unless the parties request that the documents be returned, at their expense, such documentation should be destroyed after written notice has been given to the parties.

15 As a consequence of any shortcomings in the proper discharge of their functions, arbitral institutions should, subject to the rules, oppose or reject future appointments.

16 No information should be disclosed without prior written permission from the parties involved.

17 Arbitral institutions may use information on the nature of the cases and the amounts involved for statistical purposes.

Duty 25: Register and record of awards

Arbitral institutions should keep a register and record of awards made in proceedings administered by them in a way that ensures their confidentiality¹⁸.

Duty 26: Publication of awards

Unless a party objects, arbitral institutions should contribute to the creation of a body of arbitration case law by publishing important awards made under their rules, once all confidential information has been removed¹⁹.

VIII. PROMOTION

Arbitral institutions should promote arbitration for the resolution of disputes.

Duty 27: Training

Arbitral institutions, individually or in conjunction with other institutions, should endeavor to offer permanent training programs that encourage professionalism in arbitration practice.

Duty 28: Dissemination

Arbitral institutions have the mission to disseminate knowledge of arbitration as a dispute resolution method and contribute to creating a culture of arbitration, in particular by organizing or participating in courses, conferences and seminars. They should also encourage the publication of articles

18 This information may only be viewed by the parties or their authorized representatives. Arbitral institutions may allow access to their records for arbitration-related research projects. Such access must be preceded by the execution of a confidentiality agreement on private data and access shall not, under any circumstances, include access to memoranda, notes or submissions filed by the parties during the proceedings.

19 For that purpose, arbitral institutions should, in their rules, provide information on their policy on award publication and should inform parties of their right to object to the publication of awards or decisions handed down in the proceeding.

on arbitration-related topics and should ensure that arbitration features in the media²⁰.

20 The aim of this activity should be to widen the forum for analysis and debate on arbitration to include groups outside the traditional communities of users, and to contribute to disseminating arbitral institutions' schedule of activities and events.

REFERENCES

This proposal draws on the following documents:

- Statement of Ethical Principles of the American Arbitration Association
- National Arbitration Forum's Arbitration Bill of Rights (with commentary)
- CPR Principles for ADR Provider Organizations
- CPR Model Rule for the lawyer as third-party neutral

In addition, the following sources were consulted:

A. Rules

- ABA Model Rules of Professional Conduct
- JAMS Arbitrators Ethics Guidelines
- NAF Code of Conduct for Arbitrators
- Swiss Chamber's Code of Ethics of Arbitrators
- IBA International Code of Ethics
- Washington Mediation Association's Standards of Practice for Mediators
- National Mediation Board. Uniform Guidelines for Placement on the National Mediation Board's Roster of Arbitrators
- DC Bar. Comparison Chart on Arbitrator's Standards of Conduct

B. Articles

- Murray L. Smith, Impartiality of the party appointed arbitrator, *Arbitration International*, Vol. 6, No. 4 (1990).

- Sigfried H. Elsing, Ethical Issues in Litigation Perspective, IBA International Litigation News, Oct. 2004.
- Doak Bishop and Lucy Reed, Practical Guidelines for interviewing, selecting, and challenging party-appointed arbitrators in international commercial arbitration, Arbitration International, Vol. 14, No. 4 (1998).
- Bruce Meyerson and John M. Townsend, Revised Code of Ethics for Commercial Arbitrators Explained, Dispute Resolution Journal, April 2004.
- Otto de Witt, Nathalie Voser and Neomi Rao, Background information on the IBA Guidelines on Conflict of interest in international arbitration, Business Law International, Vol. 5, Issue 3, September 2004.

SECTION TWO
RULES OF ARBITRATION INSTITUTIONS

FOREWORD

The Spanish Arbitration Club devotes Section Two of its Code of Good Arbitration Practice to the rules of arbitral institutions²¹.

Arbitral institutions have a key role to play in the process of instilling confidence, which is crucial for the development of arbitration as a dispute resolution mechanism. Against this backdrop, arbitral rules are essential instruments for the dissemination of guidelines for certainty and to inform potentially interested parties of the characteristics of each institution.

In producing Section Two of the Code, the Spanish Arbitration Club (*Club Español del Arbitraje* or “CEA”) considered it appropriate to make public a number of recommendations aimed at the parties, lawyers and arbitrators, and to make a model set of Rules available to the arbitration community which it believes reflect the prevailing international trends in this area. We are confident that this second section of the Code will contribute to driving forward the development of arbitration.

ARBITRATION BEST PRACTICES COMMITTEE
SPANISH ARBITRATION CLUB
OCTOBER 2008

21 The Arbitration Best Practices Committee appointed a panel to draft Section Two of the Code of Good Arbitration Practice made up of José Antonio Caínzos, Miguel Ángel Fernández-Ballesteros, Julio González Soria, Mercedes Fernández, Miguel Virgós, Pilar Perales Viscasillas and Vicente Sierra, and chaired by Jesús Remón. The panel would like to thank the following persons for their assistance during the drafting process: Elena Gutiérrez, Marco de Benito and Ángel Pérez Pardo, members of CEA-40. The panel's draft was approved by the Club's Management Committee after being reviewed by an *ad hoc* commission made up of José M^a Alonso, David Arias, Juan Carlos Calvo, Juan Fernández-Armesto, Miguel Ángel Fernández-Ballesteros and Jesús Remón.

RECOMMENDATIONS

I. THE ARBITRAL AGREEMENT

1. Where the administration of the arbitration is entrusted to an arbitral institution, the arbitration clause should state that the applicable Court of Arbitration Rules be those in force on the date of commencement of the arbitration, in order to avoid any doubt as to which Rules apply where they have been amended in the period between signature of the arbitration clause and commencement of the proceeding.
2. In all cases, it is advisable to select a country that has ratified the 1958 New York Convention as the place of arbitration.
3. It is also advisable to select an arbitration at law, unless there are special reasons in a particular case that make it advisable to have an arbitration in equity.
4. “Split” clauses (where some aspects of the agreement are submitted to arbitration and others to the courts of the country in question) should be avoided. If they are used, they must clearly establish which aspects are to be submitted to arbitration and which are not.
5. It is highly advisable to establish rules that facilitate communications and notifications, and avoid doubts concerning the calculation of time limits.
6. The arbitration clause should specify expressly whether or not the proceeding is confidential and, as appropriate, the scope of the confidentiality obligation (or for there to be common agreement on this point once the arbitration has commenced).
7. If any of the parties is a public enterprise, it is advisable that it waive any immunity from which it

may benefit.

8. Requirements for or limitations on arbitrators should not be established if they hinder or excessively delay their appointment.

II. APPOINTMENT OF ARBITRATORS

9. The parties may openly agree on the procedure for the appointment of arbitrators.
10. As a general rule, decisions on disputes should be entrusted to a sole arbitrator, notwithstanding the possibility of appointing an arbitral panel of three arbitrators if the circumstances so advise.
11. As a general rule, notwithstanding the particular circumstances that may be of use in identifying the services offered by certain arbitral institutions, closed lists of arbitrators should not be used. In any event, it is not advisable to require that the arbitrators to be proposed by the parties appear on the Court of Arbitration's list.
12. One possibility that has advantages is for the Court of Arbitration to present the parties with a short list of prospective arbitrators for the appointment of a sole arbitrator or, where appropriate, the chairperson of the arbitral panel.
13. Consideration should be given, in any case, to the possibility of the Court of Arbitration appointing all the arbitrators.
14. As a general rule, where the parties to an arbitration do not share the same nationality, the sole or presiding arbitrator should be of a nationality other than those of the parties.
15. If the claimants or defendants in a multi-party arbitration cannot reach agreement on the appointment of an arbitrator, it is advisable for the

Court of Arbitration itself to appoint the arbitral tribunal.

16. It is good practice for the Court of Arbitration to be able to reject the arbitrators proposed by the parties or appointed by the other arbitrators if, in its opinion, they do not fulfill the necessary requirements of independence or impartiality.
17. The Court of Arbitration and/or arbitrators should always give reasons for its/their decisions where an arbitrator is challenged.
18. It is advisable to publish challenge decisions, provided that the arbitration proceeding has been concluded, there is no confidentiality agreement expressly preventing publication, and the personal data concerning the arbitrators and the parties have been removed.
19. The Court of Arbitration can act as the appointing authority for arbitrators and as the competent authority for decisions on challenges in *ad hoc* arbitrations. So that provision for such functions can be made in arbitration agreements, the Court of Arbitration should already have the appropriate rules in place clearly defining those functions. Such rules can be incorporated into the rules of procedure or published as independent rules.

III. PROCEDURE

20. The language of the arbitration should be freely agreed on by the parties, and should not be limited to Spanish. Nevertheless, the Court of Arbitration may decide that Spanish be the language of the arbitration in the absence of express agreement.
21. Agreement should be reached on one common language which should, if possible, be neutral, bearing in mind the place of the arbitration, the law applicable to the agreement, the language of the

agreement, the language of the documents and that spoken by the main witnesses, and the availability of arbitrators with fluency in the language to be designated.

22. As an exception, agreement can also be reached on dispensing with the need for documents to be translated into the language of the arbitration. This practice saves time and money, but is only advisable where the documents are written in a language that is commonly spoken in international transactions.
23. Counterclaims are only admissible where the legal relationship in dispute falls within the scope of application of the arbitral agreement and are directed against the claimant alone.
24. Joinder of arbitration proceedings in progress before the same Court of Arbitration should be accepted, provided that it is possible under the applicable arbitration agreements and does not cause detriment to any of the parties, taking account of the stage of the proceedings.
25. Arbitrators should be given the authority to summon other parties at the request of any of the parties already involved in the proceeding.
26. It is good practice to allow the involvement of third parties not considered to be a claimant or defendant if the arbitrators are of the view that their relationship or link to the case makes this advisable and provided that the arbitration clause so permits.
27. In addition, in *ad hoc* international arbitrations, or where agreed by the parties, it is advisable to draw up terms of reference or make a short procedural order. In both cases, a preliminary hearing should be held to determine the essential aspects of the proceeding, either in the presence of the parties

and their representatives or by means, such as videoconferencing, that guarantee proper communication.

IV. INTERIM MEASURES

28. The adoption of interim measures should be permitted at any time and the measures need not be *numerus clausus*.

V. EVIDENCE

29. It is important to establish the obligation that arbitrators keep information on the type and substance of evidence proposed by the parties confidential.

30. As a general rule, provided that it is relevant and observes the adversarial principle, it is recommended that the submission of documents be allowed in the evidentiary phase, notwithstanding the establishment of such limits as are considered necessary and the need to ensure that a request to submit evidence is not used to delay the proceeding unnecessarily or obtain information that goes beyond the scope of the proceeding. For this purpose, the possibility of submitting new documents at hearings for the taking of statements or in the final phases of the proceeding should be limited, unless it is evidenced that there is just cause or submission of such documents previously was not possible.

31. In international arbitrations, it is recommended that written witness statements be permitted and, in addition, that arbitrators be allowed to call these witnesses to testify orally *ex officio* or at the request of any of the parties.

32. The arbitrators should be allowed to call as many of the witnesses and experts proposed by the parties to testify as is considered appropriate.

VI. THE AWARD

33. The Court of Arbitration should be able to extend the deadline for making the award if the circumstances of the case so require and provided that the legislation applicable to the arbitration so permits. Nevertheless, it is advisable to avoid excessive use of this power and to inform all parties appearing in the proceeding immediately of any decision that may be made on extension of the deadline.
34. It is recommended that the Rules make provision for criteria on the awarding of costs.
35. The parties should be allowed to waive any appeal against the award where such waiver is permitted by the law of the place of arbitration.
36. The liability of the arbitrators and of the Court of Arbitration should be limited to cases of willful misconduct.
37. The Court of Arbitration should have a register of awards made.
38. The Court of Arbitration should set up and maintain an appropriate system for the custody and retention of the arbitration case file, and return documents submitted by the parties or destroy them, if the parties so agree, once the proceeding has been concluded. It is advisable for the duration of the custody and retention obligation to be provided for in advance.

VII. CEA MODEL RULES OF ARBITRATION

39. The Spanish Arbitration Club has approved the **Model Rules** attached to Section Two of its Code of Good Arbitration Practice.

CEA MODEL RULES OF ARBITRATION

I. GENERAL ISSUES

1. Scope of application

These Rules shall apply to arbitrations administered by the Court of *[the arbitral institution involved]*.

2. Interpretation

1. In these Rules:

- a) “the Court” means the *[the arbitral institution involved]*;
- b) “arbitrators” means the arbitral tribunal, composed of one or more arbitrators;
- c) references implying the singular include the plural where there are multiple parties;
- d) “arbitration” shall mean the same as “arbitration proceeding”;
- e) “communication” includes any notification, question, letter, memorandum or information directed to any of the parties, arbitrators or the Court;
- f) “contact details” includes domicile, principal residence, establishment, postal address, telephone, fax and e-mail address.

2. The parties shall be deemed to entrust the administration of the arbitration to the Court where the arbitration agreement submits the resolution of their dispute to “the Court”, “the Court Rules”, “the rules of arbitration of the Court” or where any other analogous expression is used by them.

3. Submission to the Rules of Arbitration shall be taken to mean the Rules in force on the date of commencement of the arbitration, unless there

is express agreement that submission be to the Rules in force on the date of the arbitration agreement.

4. References to the “Arbitration Law” shall be taken as references to the applicable arbitration legislation in force on the date of filing the request for arbitration.
5. If the arbitral tribunal has not yet been constituted, the Court, acting *ex officio* or at the request of any of the parties or arbitrators, shall definitively settle any doubts that may arise over the interpretation of these Rules.

3. Communications

1. All communications filed by a party, as well as all documents attached thereto, shall be accompanied by a copy for every other party together with one additional copy for each arbitrator, one for the Court, and one copy in electronic format. The Court may, at the request of either of the parties and in view of the circumstances of the case, waive the requirement for the filing of a copy in electronic format.
2. Each party, in its first submission, must designate an address for communication purposes. All communications to be directed to that party in the course of the arbitration shall be sent to that address.
3. If a party has not designated an address for communication purposes or if no such address is stipulated in the arbitration agreement, communications to that party shall be addressed to its domicile, establishment or principal residence.
4. If, after having made reasonable inquiries, it is not possible to ascertain any of the places to which reference is made in the preceding paragraph,

communications to that party shall be directed to the addressee's last known domicile, principal residence or address.

5. The claimant shall supply the Court with the information set forth in paragraphs 2 and 3 regarding the defendant until such time as the defendant appears as a party or designates an address for communications.
6. Communications may be made by delivery with acknowledgement of receipt, registered mail, courier, facsimile, electronically or by any other means that provides a record of sending and receipt. Electronic communications shall be preferred.
7. A communication shall be deemed to have been received on the date on which it was:
 - a) personally delivered to the addressee;
 - b) delivered to the addressee's domicile, principal residence, establishment or known address;
or
 - c) attempted to be delivered in accordance with paragraph 4 of this Article.
8. The parties may agree that communications be effected by electronic means only, using the communication platform provided for or established by the Court.

4. Time limits

1. Unless otherwise provided, where time limits indicated in days start on a particular day, that day shall be excluded from the calculation of the time limit, which shall start to run on the following day.
2. All communications shall be deemed to have been received on the day they were delivered or were

attempted to be delivered in accordance with the preceding paragraph.

3. Non-business days shall be included in the calculation of time limits. However, if the last day of the time limit is a non-business day in the place where the Court is located, the time limit shall be deemed to be extended to the first following business day.
4. The time limits set in these Rules may, depending on the circumstances of the case, be modified (including extension, shortening or suspension) by the Court (until the arbitral tribunal has been constituted) and by the arbitrators (once the arbitral tribunal has been constituted), unless the parties have expressly agreed otherwise.
5. The Court shall, at all times, ensure effective compliance with time limits and endeavor to avoid delays. This aspect shall be taken into account by the arbitrators in deciding on the costs of the arbitration and by the Court in fixing the arbitrators' final fees.

II. COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION

5. Request for arbitration

1. The arbitration proceeding shall commence with the filing of a request for arbitration at the Court, which shall record that date on the register established for that purpose.
2. The request for arbitration shall at least contain the following information:
 - a) full name, address and other relevant identification and contact information for the claimant(s) and the defendant(s). In particular, it shall indicate the addresses to which

communications to all parties must be directed pursuant to Article 3;

- b) full name, address and other relevant identification and contact information for the claimant's representatives in the arbitration;
 - c) a brief description of the dispute;
 - d) the relief sought and, if possible, the amount claimed;
 - e) the legal transaction, instrument or agreement giving rise to the dispute or to which the dispute relates;
 - f) the arbitration agreement referred to;
 - g) a proposal on the number of arbitrators and the language and place of the arbitration in the absence of prior agreement thereon or if these are to be modified; and
 - h) if the arbitration agreement provides for the appointment of a three-member tribunal, the nomination of the arbitrator whom the claimant is entitled to appoint, indicating his full name and contact details and accompanied by the declaration on independence and impartiality referred to in Article 10.
3. The request for arbitration may also contain a reference to the law applicable to the merits of the case.
4. The request for arbitration must be accompanied by at least the following documents:
- a) a copy of the arbitration agreement or of the communications providing a record of such agreement;

- b) as appropriate, a copy of the agreements giving rise to the dispute;
 - c) letter of appointment of the persons who are to represent the claimant in the arbitration, signed by the claimant; and
 - d) proof of payment of the Court's admission and administration fees and, as appropriate, an advance to cover the applicable arbitrators' fees.
5. If the request for arbitration is incomplete, or the required number of copies or attachments has not been supplied, or the Court's admission and administration fees or advance to cover the arbitrators' fees fixed by the Court have not been paid, the Court may fix a time limit for the claimant to rectify the defect or pay the fees or advance. Following rectification of the defect or payment of the fees or advance within the time limit set, the request for arbitration shall be deemed to have been validly filed on the date on which it was initially filed.
6. Following receipt of the request for arbitration together with all the related documents and copies, and rectification of any defects, as appropriate, and payment of the fees and advance required, the Court shall, without delay, send the defendant a copy of the request.

6. Answer to the request for arbitration

- 1. The defendant shall answer the request for arbitration within fifteen days of its receipt.
- 2. The answer to the request for arbitration shall contain at least the following information:
 - a) the defendant's full name, address and other relevant identification and contact information;

in particular, it shall designate the person and address to whom/which the communications to be made in the course of the arbitration shall be sent;

- b) full name, address and other relevant identification and contact information for the defendant's representatives in the arbitration;
 - c) brief submissions on the claimant's description of the dispute;
 - d) its response to the relief sought by the claimant;
 - e) if the defendant objects to the arbitration, its position on the existence, validity or applicability of the arbitration agreement;
 - f) its position on the claimant's proposal on the number of arbitrators and the language and place of the arbitration, in the absence of prior agreement thereon or if these are to be modified;
 - g) if the arbitration agreement provides for the appointment of a three-member tribunal, the nomination of the arbitrator whom the defendant is entitled to appoint, indicating his full name and contact details and accompanied by the declaration on independence and impartiality referred to in Article 10; and
 - h) its position on the law applicable to the merits of the case, if this issue was raised by the claimant.
3. The answer to the request for arbitration must be accompanied by at least the following documents:

- a) letter of appointment of the persons who are to represent the defendant in the arbitration, signed by the defendant; and
 - b) proof of payment of the Court's admission and administration fees and, as appropriate, an advance to cover the applicable arbitrators' fees.
4. Following receipt of the answer to the request for arbitration together with all the related documents and copies, and payment of the fees and advance fixed by the Court, the Court shall, without delay, send a copy to the claimant. The rectification of any defects in the answer shall be governed by the provisions of Article 5(5) of these Rules.
 5. Failure to file the answer to the request for arbitration within the time limit set shall not suspend the proceeding or the appointment of the arbitrators.

7. Counterclaim

1. If the defendant intends to make a counterclaim, it shall give notice thereof in the answer to the request for arbitration.
2. The notice of counterclaim shall contain at least the following information:
 - a) a brief description of the dispute; and
 - b) the relief sought and, if possible, the amount counterclaimed.
3. The counterclaim must be accompanied by, at least, proof of payment of the Court's fees and an advance to cover the arbitrators' fees, in such amount as may be determined by the Court.
4. Notwithstanding the other applicable requirements, a counterclaim shall only be admissible if the legal relationship that forms the subject-matter of the

counterclaim falls within the scope of application of the arbitration agreement.

5. If notice of a counterclaim has been given, the claimant shall file a preliminary answer within ten days of its receipt.
6. The preliminary answer to the notice of counterclaim shall contain at least the following information:
 - a) brief submissions on the counterclaimant's description of the counterclaim;
 - b) its response to the relief sought by the counterclaimant;
 - c) if it objects to the inclusion of the counterclaim in the arbitration proceeding, its position on the applicability of the arbitration agreement to the counterclaim; and
 - d) its position on the law applicable to the merits of the counterclaim, if this issue was raised by the counterclaimant.

8. *Prima facie* review of the existence of an arbitration agreement

Where the defendant does not file an answer to the request for arbitration, or refuses to submit to arbitration, or raises one or more pleas concerning the existence, validity or scope of the arbitration agreement, the following alternatives may arise:

- a) If the Court considers that there is a *prima facie* case for the possible existence of an arbitration agreement under the Rules, it shall proceed with the arbitration (subject to the reservations on payment of the advance as provided for by these Rules), without prejudice to the admissibility or merits of any pleas that may be raised. In such a case, any decision as to the jurisdiction of

the arbitrators shall be taken by the arbitrators themselves.

- b) If the Court does not discern any *prima facie* case for the possible existence of an arbitration agreement under the Rules, it shall notify the parties that the arbitration cannot proceed.

9. Advance to cover costs

1. The Court shall fix the amount of the advance to cover the costs of the arbitration, including any taxes applicable thereto.
2. During the arbitration proceeding, the Court may, acting *ex officio* or at the request of the arbitrators, request additional advances from the parties.
3. Where, as a result of a counterclaim being made or for any other reason, it was necessary to request the parties to pay advances on various occasions, the Court alone shall decide on the allocation of the payments made to the advances.
4. Unless the parties have expressly agreed otherwise, payment of such advances shall be made by the claimant and the defendant in equal shares. If one of the parties does not pay its share, the other party may meet that payment to enable the proceeding to continue and without prejudice to any final apportionment applicable.
5. If, at any time during the arbitration, the required advances are not paid in full, the Court shall immediately inform the parties of this fact so that the other may make the required payment within ten days. If payment is not made within this time limit, the Court shall refuse to administer the arbitration and, in that event, it shall reimburse each party with any remaining sum deposited, net of the appropriate administration expenses.

6. Once the award has been made, the Court shall send the parties a final account of the advances received. The unused balance shall be returned to the parties in the proportion to which each is entitled.

III. APPOINTMENT OF THE ARBITRATORS

10. Independence and impartiality

1. Every arbitrator must be and remain independent and impartial during the arbitration and may not engage in personal, professional or commercial dealings with the parties.
2. Before his appointment or confirmation, the person proposed as arbitrator must sign a declaration as to his independence and impartiality and notify the Court in writing of any circumstances that may be deemed material to his appointment and, in particular, any likely to give rise to doubts as to his independence or impartiality. The Court shall serve notice of this document on the parties so that they may make submissions on this issue within ten days.
3. The arbitrator shall immediately notify both the Court and the parties in writing of any circumstances of a similar nature which may arise during the arbitration.
4. Decisions on the appointment, confirmation, challenge or replacement of an arbitrator shall be final.
5. By accepting to serve, the arbitrator agrees to perform his function until the conclusion with diligence and in accordance with these Rules.

11. Number of arbitrators and appointment procedure

1. If the parties have not agreed on the number of arbitrators, the Court shall decide whether to appoint a sole arbitrator or a three-member arbitral tribunal, depending on all of the circumstances.
2. As a general rule, the Court shall appoint a sole arbitrator unless the complexity of the case or the amount in dispute justifies the appointment of three arbitrators.
3. Where the parties have agreed or, in the absence of such agreement, where the Court has decided that a sole arbitrator should be appointed, the parties shall be given a joint time limit of twenty days to agree on the appointment. If, on expiry of this time limit, there has been no notification of an appointment by mutual agreement, the Court shall appoint the sole arbitrator within fifteen days thereafter.
4. Where the parties have agreed on the appointment of three arbitrators before commencement of the arbitration, each party shall nominate, either in the request for arbitration or in the answer to the request for arbitration, respectively, one arbitrator. If either of the parties does not nominate the arbitrator to which it is entitled in the above-mentioned pleadings, the appointment shall be made by the Court. The third arbitrator, who shall act as chairperson of the arbitral tribunal, shall be appointed by the other two arbitrators, who will be given a time limit of twenty days in which to make the appointment by mutual agreement. If, on expiry of this time limit, there has been no notification of an appointment by mutual agreement, the Court shall appoint the third arbitrator within fifteen days thereafter.

5. If, in the absence of agreement between the parties, the Court decides that a three-member tribunal should be appointed, the parties shall be given a joint time limit of fifteen days for each of them to nominate the arbitrator to which it is entitled. If, on expiry of this time limit, there has been no notification by a party of its nomination, the Court shall appoint the arbitrator whom that party was entitled to nominate. The third arbitrator shall be appointed in accordance with the preceding paragraph.
6. The arbitrators shall notify their acceptance, as appropriate, within fifteen days of receipt of the notification from the Court of their appointment.

12. Confirmation or appointment by the Court

1. In appointing or confirming an arbitrator, the Court must consider the nature and circumstances of the dispute, the nationality, location and language of the parties, and the availability and ability of that person to conduct the arbitration in accordance with the Rules.
2. The Court shall notify the parties of any circumstances of which it is aware regarding an arbitrator nominated by the parties which may affect his suitability or prevent or seriously hinder him from performing his functions in accordance with the Rules or within the established time limits.
3. The Court shall confirm the arbitrators appointed by the parties or by the other arbitrators unless, in its opinion alone, it considers that the relationship of the person appointed with the dispute, the parties or their lawyers could give rise to doubts as to his suitability, availability, independence or impartiality.

4. If an arbitrator nominated by the parties or the arbitrators is not confirmed by the Court, the nominating party or arbitrators shall be given a further ten days to nominate another arbitrator. If the new arbitrator is not confirmed either, the Court shall proceed to appoint one.
5. In international arbitrations, except where the parties have the same nationality or have otherwise agreed, the sole arbitrator or the chairperson of the arbitral tribunal shall be of a nationality other than those of the parties unless, in the circumstances, the contrary is advisable and neither of the parties objects within the time limit fixed by the Court for that purpose.
6. Where the Court is to appoint the sole arbitrator or the chairperson of the arbitral tribunal, the Court shall provide the parties with a list of at least three candidates and grant them a joint time limit of ten days in which to eliminate the candidate(s) to which they object. The Court shall appoint the arbitrator in question from among the individuals who were not eliminated by the parties and, where this is not possible, at its own discretion.

13. Multiple parties

1. Where there are multiple claimants or defendants, and three arbitrators are to be appointed, the multiple claimants, jointly, shall nominate one arbitrator and the multiple defendants, jointly, shall nominate another arbitrator.
2. In the absence of such joint nomination and of agreement on the method for the constitution of the arbitral tribunal, the Court shall appoint three arbitrators and designate one of them to act as chairperson. The Court shall proceed to appoint the arbitral tribunal in accordance with Article 12.6 above, and shall nominate at least three candidates for each arbitrator.

14. Joinder

1. If a party files a request for arbitration in connection with a legal relationship in respect of which an arbitration proceeding between the same parties is already pending under these Rules, the Court may, at the request of either of the parties and having consulted with both and, as appropriate, with the arbitrators, join the request to the pending proceeding. In doing so, the Court shall take account of, *inter alia*, the nature of the new claims, their relation to the claims filed in the proceeding already commenced and the stage of the proceeding.
2. If the Court decides to join the new request for arbitration to a pending proceeding in which an arbitral tribunal has already been constituted, the parties shall be presumed to have waived the right to which they were entitled to nominate an arbitrator in respect of that new request.
3. The decision of the Court on joinder shall be final.
4. The arbitrators may, at the request of either of the parties and having heard both of them, allow one or more third parties, having given their written consent, to participate as parties in the arbitration. Moreover, insofar as permitted by the arbitration clause, the arbitrators may allow the participation of third parties after reasoned assessment of their relationship to, or links with, the proceeding.

15. Challenge of arbitrators

1. A challenge of an arbitrator, whether for a lack of independence, impartiality or otherwise, shall be made by the submission of a written statement specifying and substantiating the facts on which the challenge is based.

2. The challenge shall be made within fifteen days from receipt of the communication on the appointment or confirmation of the arbitrator, or from the date on which the party became aware of the facts on which the challenge is based, if later.
3. The Court shall serve notice of the written statement on the arbitrator under challenge and the other parties. If, within ten days of notification, the other party or the arbitrator accepts the challenge, the arbitrator under challenge shall cease his duties and another arbitrator shall be appointed in accordance with Article 16 of these Rules on replacement.
4. If neither the arbitrator nor the other party accepts the challenge, this shall be indicated by submitting a written statement to the Court within the same time limit of ten days and having examined, as the case may be, any evidence proposed and admitted, the Court shall make a reasoned decision on the challenge.
5. The costs of the ancillary challenge proceeding shall be met by the party whose challenge was refused if the arbitrators or the Court consider there to have been bad faith or recklessness in the challenge.

16. Replacement of arbitrators and effects

1. An arbitrator shall be replaced upon his death, upon resignation, following a successful challenge or at the request of both parties.
2. An arbitrator shall also be replaced on the initiative of the Court or of the other arbitrators after all parties and the arbitrators have been heard within ten days, where the arbitrator is not fulfilling his functions in accordance with the Rules or within the prescribed time limits or where circumstances exist that seriously hinder such fulfillment.

3. Regardless of the reason requiring a new arbitrator to be appointed, the appointment shall take place according to the rules governing the appointment of the replaced arbitrator. Where applicable, the Court shall fix a time limit to enable the party with entitlement to nominate a new arbitrator to do so. If that party does not nominate a replacement arbitrator within the time limit set, the arbitrator shall be appointed by the Court in accordance with Article 12(6) above.
4. As a general rule, when an arbitrator is to be replaced, the arbitration proceeding shall resume at the stage at which the replaced arbitrator ceased to perform his functions, unless the arbitral tribunal or the Court, in the case of a sole arbitrator, decides otherwise.
5. Once proceedings have been concluded, the Court may decide, in lieu of replacing an arbitrator and once both parties and the arbitrators have been heard within ten days, that the remaining arbitrators shall continue the arbitration.

IV. THE ARBITRATION PROCEEDING - GENERAL PROVISIONS

17. Place of the arbitration

1. The place of arbitration shall be the place where the Court has its seat, unless the parties have otherwise agreed.
2. As a general rule, hearings and meetings shall be held in the place of the arbitration, although the arbitrators may hold meetings, for deliberation or any other purposes, at any location they consider appropriate. They may also, with the parties' consent, hold hearings in places other than the

place of arbitration and this need not involve *per se* a change in the place of the arbitration.

3. The award shall be deemed to be made in the place of the arbitration.

18. Language of the arbitration

1. The language of the arbitration shall be Spanish, unless the parties have otherwise agreed.
2. The arbitral tribunal may order that any of the documents filed during the proceeding in their original language be accompanied by a translation into the language of the arbitration.

19. Representation of the parties

The parties may be represented or advised by persons of their choice. For that purpose, it shall be sufficient for the party to provide, in the relevant written statement, the names of the representatives or advisers, their contact details and the capacity in which they act. In the case of doubt, the arbitral tribunal may require duly authenticated proof of the authority conferred to act as a representative.

20. Rules governing the proceeding

1. As soon as the arbitral tribunal has been formally constituted, provided that the requisite advances have been paid by the parties, the Court shall transmit the file to the arbitrators.
2. Subject to these Rules, the arbitrators may manage the arbitration in such manner as they see fit, at all times observing the principle of equality of the parties and providing each of them with sufficient opportunities to present their case.
3. The parties may, by mutual written agreement, amend the provisions of Title V of these Rules as they see fit and the arbitrators must observe

such amendments and manage the proceeding in accordance with the parties' agreement.

4. Without prejudice to the previous paragraph, the arbitrators shall manage and organize the arbitration proceeding, as appropriate after consulting the parties, using procedural orders.
5. A copy of all communications, written statements and documents submitted by a party to the tribunal shall be simultaneously sent to the other party and to the Court. The same rule shall apply to communications and decisions by the arbitral tribunal addressed to either or both of the parties.
6. All participants in the arbitration proceeding shall act in accordance with the principles of confidentiality and good faith.

21. Applicable rules of law

1. The arbitrators shall decide in accordance with the rules of law selected by the parties or, in the absence thereof, with such rules of law as they see fit.
2. The arbitrators shall only decide in equity, that is, *ex aequo et bono* or as *amiables compositeurs* if expressly authorized to do so by the parties.
3. In any event, the arbitrators shall decide in accordance with the provisions of the agreement and shall take account of the commercial practices applicable to the case.

22. Implied waiver of challenge

Where one party is aware of an infringement of any of these Rules and, nevertheless, continues with the arbitration without promptly reporting that infringement, it shall be deemed to have waived any challenge thereto.

V. CONDUCT OF THE PROCEEDING

23. First procedural order

1. As soon as the arbitrators receive the file from the Court and, in any case, within thirty days of receipt thereof, they shall make a procedural order after consulting the parties to determine at least the following issues:
 - a) the full names of the arbitrators and the parties, and the addresses they have designated for communications during the arbitration;
 - b) the means of communication to be used;
 - c) the language and place of the arbitration;
 - d) the rules of law applicable to the substance of the dispute or, where appropriate, whether it must be resolved in equity; and
 - e) the procedural timetable.
2. The parties authorize the arbitrators to modify the procedural timetable as often and to such extent as they consider necessary, including to extend or suspend, if required, the time periods initially established within the limits fixed in Article 38(2) of these Rules.

24. The claim

1. Unless the timetable established provides otherwise, the arbitrators shall give the claimant thirty days to file the claim.
2. In the claim, the claimant shall state the following:
 - a) the specific relief sought;
 - b) the facts and legal grounds on which the relief sought is based; and

- c) a list of the items of evidence it intends to rely on.
3. The claim shall also be accompanied by all documents, witness statements and expert reports intended to be relied on in support of the relief claimed.

25. Answer to the claim

1. The claim shall be served on the other party so that, within the time limit established in the timetable or, in the absence thereof, within thirty days, the other party may file its answer to the claim, which must meet the requirements set forth in the preceding Article in respect of the claim.
2. Failure to answer the claim shall not prevent the arbitration from proceeding normally.

26. Counterclaim

1. In the answer to the claim or in a separate submission, if so provided for and on condition that due notice has been given, the defendant may make a counterclaim, which must meet the requirements set forth in respect of the claim.
2. The counterclaim shall be served on the other party so that, within the time limit established in the timetable or, in the absence thereof, within twenty days, the other party may file its reply to the counterclaim, which must meet the requirements set forth in the previous Article in respect of the claim.

27. New claims

The making of new claims must be authorized by the arbitrators who, in deciding on this point, shall take account of the nature of the new claims, the stage of the proceeding and all other relevant circumstances.

28. Other submissions

The arbitrators shall decide whether the parties are required to file other submissions, besides the claim and the answer, such as a reply or rejoinder, and shall fix the time limits for their submission.

29. Evidence

1. Once the claim or, as appropriate, the counterclaim has been answered or replied to, the parties shall be given ten days to specify the additional evidence they are to propose in support of the relief claimed. The arbitral tribunal may replace this written procedure with a hearing, which shall take place in any event if the parties so request.
2. Each party shall bear the burden of proof of the facts on which it bases the relief it seeks or its defenses against such relief.
3. It shall be for the arbitrators to decide, by procedural order, on the admissibility, relevancy and utility of the evidence proposed or agreed to *ex officio*.
4. Evidence shall be taken on the basis of the principle that each party is entitled to be informed, with reasonable notice, of the evidence on which the other party bases its arguments.
5. The arbitrators may, at any time in the proceeding, gather documents or other evidence from the parties, which shall be submitted by such time limit as may be determined for that purpose.
6. If an item of evidence is in the possession or under the control of a party that unjustifiably refuses to submit it or provide access thereto, the arbitrators may draw such conclusions as they see fit from that conduct in respect of the subject matter of the evidence.

7. The arbitrators shall be free to assess the evidence, in accordance with the rules on good judgment.

30. Hearings

1. Arbitrators may settle the dispute solely on the basis of the documents and other evidence submitted by the parties, unless either of the parties requests a hearing.
2. When a hearing is to be held, the arbitral tribunal, giving reasonable notice, shall summon the parties to appear on the day and at the place fixed by it.
3. The hearing may take place even if one of the parties, having been summoned with due notice, does not appear and does not show good cause.
4. The arbitral tribunal shall be exclusively in charge of the hearings.
5. Having given due notice and consulted the parties, the arbitrators shall, by way of a procedural order, establish the rules pursuant to which the hearing is to take place, the manner in which witnesses or experts are to be questioned and the order in which they are to be called.
6. Hearings shall be held *in camera* unless the parties agree otherwise.

31. Witnesses

1. For the purposes of these Rules, a person who gives evidence as to his knowledge of any factual issue shall be considered to be a witness, whether or not he is a party to the arbitration.
2. The arbitrators may stipulate that witnesses give evidence in writing, notwithstanding the fact that questioning may also be required to take place before the arbitrators and in the presence

of the parties, orally or by using a means of communication that makes the witness's presence unnecessary. Witness evidence shall be taken orally whenever one of the parties so requires or if the arbitrators so agree.

3. If a witness who has been called to appear at a hearing for questioning does not appear and does not show good cause, the arbitrators may take account of this in their assessment of the evidence and, as appropriate, may regard the written evidence as not having been given if they consider it appropriate in view of the circumstances.
4. The parties may direct such questions as they consider appropriate to the witness, under the supervision of the arbitrators as to relevance and utility. The arbitrators may also question the witness at any time.

32. Experts

1. The arbitrators may, after consulting the parties, appoint one or more experts who must be and remain impartial and independent of the parties during the arbitration, to provide their opinion on specific issues.
2. The arbitrators shall also be authorized to require either of the parties to make available to the experts appointed by the arbitrators any material information or documents, assets or evidence to be examined.
3. The arbitrators shall provide the parties with the report of the expert appointed by the arbitral tribunal so that they may make such submissions on the report as they consider appropriate at the closing submissions stage. The parties shall be entitled to examine any document cited by the expert in his report.

4. Once an expert appointed by a party or by the arbitrators has presented his report, if either of the parties so requests and the arbitrators consider it appropriate, he shall appear at a hearing at which the parties and arbitrators may question him as to the content of his report. If the experts are appointed by the arbitrators, the parties may also call other experts to give evidence on the issues discussed.
5. The experts may be questioned individually or simultaneously, in a confrontational setting, as stipulated by the arbitrators.
6. The fees and expenses of all experts appointed by the arbitral tribunal shall be deemed to be expenses of the arbitration.

33. Closing submissions

1. Once the hearing has been concluded or, in the case of a written proceeding, once the last party pleading has been received, the arbitral tribunal shall, within the time limit established in the timetable or, in the absence thereof, within fifteen days, notify the parties thereof so that they may present their closing submissions.
2. The arbitral tribunal may replace written closing submissions with oral closing speeches to be delivered at a hearing, which shall take place in any event at the request of both parties.

34. Challenge to the jurisdiction of the arbitral tribunal

1. The arbitrators shall be authorized to decide on their own jurisdiction, including on pleas concerning to the existence, validity or scope of the arbitration agreement or any other pleas that, if upheld, prevent consideration of the merits of the case.

2. For this purpose, an arbitration agreement that forms part of a contract shall be regarded as independent of the other contractual clauses. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail *per se* the invalidity of the arbitration agreement.
3. As a general rule, objections to the arbitrators' jurisdiction shall be made in the answer to the request for arbitration or, at the latest, in the answer to the claim or, as appropriate, the reply to the counterclaim and shall not suspend the proceeding.
4. As a general rule, objections to the arbitrators' jurisdiction shall be decided on as a preliminary issue and by means of an award, once both parties have been heard, or in the final award, once proceedings have been closed.

35. Default

1. If the claimant fails to file the claim in time without sufficient cause, the proceeding shall be deemed to be concluded.
2. If the defendant or the claimant against whom a counterclaim has been filed fails to file an answer or reply in time without sufficient cause, the proceeding shall be ordered to proceed.
3. If one of the parties, duly summoned, fails to appear at a hearing without sufficient cause, the arbitrators shall be authorized to proceed with the arbitration.
4. If one of the parties is duly required to file documents and does not do so within the established time limits without sufficient cause, the arbitrators may make the award on the basis of the evidence available.

36. Interim measures

1. Unless the parties have otherwise agreed, the arbitrators may, at the request of either of the parties, order such interim measures as they deem necessary, weighing up the circumstances of the case and, in particular, the appearance of a good right, *periculum in mora* and the potential consequences of ordering or refusing such measures. The measure must be proportionate to the aim pursued and the least onerous possible in order to achieve that aim.
2. The arbitrators may require the applicant to stand sufficient surety, including by way of a secured counter-guarantee in such form as the tribunal may deem sufficient.
3. The arbitrators shall decide on the measures sought after hearing all the parties concerned.
4. A decision ordering interim measures may take the form of a procedural order or, if any of the parties so requests, an award.

37. Closing of the proceeding

The arbitrators shall declare the proceeding closed when they are satisfied that the parties have had a reasonable opportunity to present their case. Thereafter, no further pleading, submission or argument may be made or filed, or evidence produced, unless authorized by the arbitrators by reason of exceptional circumstances.

VI. CONCLUSION OF THE PROCEEDING AND RENDERING OF THE AWARD

38. Time limit for making the award

1. Unless the parties have otherwise agreed, the arbitrators shall decide on the relief sought within

six months of the filing of the answer to the claim or, as appropriate, the reply to the counterclaim.

2. By submitting to these Rules, the parties delegate power to the arbitrators to extend the time limit for making the award by no more than three months to enable them to conclude their assignment satisfactorily. The arbitrators shall ensure that delays do not occur. In any event, the time limit for making the award may be extended by agreement of all the parties.
3. If an arbitrator is replaced in the last month of the time period for making the award, the time limit shall be automatically extended by an additional thirty days. Where the replacement entails the need to repeat any of the steps taken in the proceeding, the time limit for making the award shall automatically be extended beyond the additional thirty days mentioned above by a further thirty days for the purposes of carrying out the steps that must be repeated.

39. Form, substance and notification of the award

1. The arbitrators shall decide the dispute by a single award or as many partial awards as they deem necessary. All awards shall be deemed to be made in the place of the arbitration and on the date stated therein.
2. Where the arbitral tribunal is composed of a panel of arbitrators, the award shall be made by a majority of the arbitrators. If there is no majority, the award shall be made by the chairperson.
3. The award must be in writing and signed by the arbitrators, who may express dissenting opinions. Where the arbitral tribunal is composed of a panel of arbitrators, the signatures of the majority of the arbitrators or, in the absence thereof, the signature of the chairperson shall be sufficient,

provided that reasons are given as to why the other signatures are missing.

4. The award shall state the reasons upon which it is based, unless the parties have otherwise agreed or where the award is by consent.
5. The arbitrators shall decide on the costs of the arbitration in the award. Any decision on costs must state the reasons upon which it is based.
6. Unless the parties have agreed otherwise in writing, as a general rule, the decision on costs shall reflect the success or failure of the respective parties' claims, except where, in view of the circumstances of the case, the arbitrators deem the application of this general rule to be inappropriate.
7. There shall be as many originals of the award made as there are parties to the arbitration and a further original shall be deposited in the filing system established for that purpose by the Court.
8. The award may be recorded in a protocol if either of the parties so requests and all necessary costs associated therewith shall be borne by the requesting party.
9. The arbitrators shall notify the award to the parties through the Court by supplying each party with a signed copy in the form established in Article 3. The same rule shall apply to any correction or clarification of, or supplement to, the award.

40. Award by consent

If, during the arbitration proceeding, the parties reach an agreement bringing the dispute to an end, whether wholly or partly, the arbitrators shall consider the proceeding closed in respect of the aspects on

which agreement is reached and they shall record this agreement in the form of an award in the terms agreed on by the parties, if requested by both parties and if the arbitrators do not consider there to be any grounds for opposition.

41. Prior scrutiny of the award by the Court

1. Before signing the award, the arbitrators shall submit it to the Court, which may, within ten days, propose modifications as to its form.
2. The Court may also, without affecting the arbitrators' liberty of decision, draw its attention to points of substance and to the determination and breakdown of costs.
3. Prior scrutiny of the award by the Court does not mean, under any circumstances, that the Court assumes any responsibility for the substance of the award.

42. Correction and clarification of, and supplement to, the award

1. Within ten days of notification of the award, unless the parties have otherwise agreed, either of them may request the following from the arbitrators:
 - a) correction of any computational, copying or typographical errors or mistakes of a similar nature;
 - b) clarification of a point or of a specific part of the award;
 - c) a supplement to the award in respect of relief sought and not decided on therein.
2. Once the other parties have been heard within ten days, the arbitrators shall duly decide by way of an award within twenty days.

3. Within the time limits set forth in the preceding paragraphs, the arbitrators may, *ex officio*, correct the errors referred to in paragraph 1.a).

43. Validity of the award

1. The award is binding on the parties. The parties undertake to comply with the award without delay.
2. If it is possible to seek recourse on the merits or on some other aspect of the dispute in the place of the arbitration, the parties shall be deemed to have waived such recourse by submitting to these Rules, insofar as such waiver can legally be made.

44. Other forms of conclusion

The arbitration proceeding may also conclude in the following ways:

- a) discontinuance by the claimant, unless the defendant objects and the arbitrators recognize that the defendant has a legitimate interest in having the case definitively resolved;
- b) mutual agreement between the parties; or
- c) when, in the arbitrators' opinion, continuance of the proceeding is unnecessary or impossible.

45. Custody and keeping of the arbitration file

1. The Court shall be responsible for the custody and keeping of the arbitration file, once the award has been made.
2. After one year has elapsed from the rendering of the award, and subject to prior notice having been given to the parties or to their representatives so that they may, within fifteen days, request the breakdown and handover, at their expense, of

the documents submitted by them, the obligation to keep the file and its associated documents shall cease, with the exception of one copy of the award and of the decisions and communications of the Court concerning the proceeding, which shall be kept in the filing system established for that purpose by the Court.

3. For as long as the Court's obligation to look after and keep the arbitration file subsists, either of the parties may request the breakdown and handover, at its expense, of such original documents as it may have submitted.

46. Costs

1. The costs of the arbitration shall be fixed in the final award and shall include:
 - a) the Court's admission and administration fees, in accordance with Schedule A (Court fees) and, as appropriate, the expenses of renting facilities and equipment for the arbitration;
 - b) the arbitrators' fees and expenses fixed or approved by the Court in accordance with Schedule B (arbitrators' fees and expenses);
 - c) the fees of the experts appointed, as appropriate, by the arbitral tribunal; and
 - d) the reasonable expenses incurred by the parties for their defense in the arbitration.

47. Arbitrators' fees

1. The Court shall fix the arbitrators' fees in accordance with Schedule B (arbitrators' fees and expenses), taking account of the time spent by the arbitrators and any other relevant circumstances, especially the early conclusion of the arbitration proceeding as a result of agreement between the

parties or any other reason and potential delays in making the award.

2. Any correction or clarification of, or supplement to, the award under Article 42 shall not give rise to any additional fees.

48. Confidentiality

1. Unless the parties have otherwise agreed, the Court and the arbitrators are obliged to maintain the confidentiality of the arbitration and award.
2. The arbitrators may order such measures as they deem appropriate in order to protect trade or industrial secrets or any other confidential information.
3. The deliberations of the arbitral tribunal are confidential.
4. An award may be published if the following conditions are met:
 - a) the relevant request for publication must be filed at the Court or the Court itself must consider publication to be in the interests of case law;
 - b) all references to the names of the parties and any information from which they may be readily identified must be removed; and
 - c) neither of the parties to the arbitration raises any objection to publication within the time limit fixed for that purpose by the Court.

49. Liability

Neither the Court nor the arbitrators shall be liable for any act or omission relating to an arbitration administered by the Court, unless willful misconduct has been shown on its part.

50. Expedited procedure

1. The parties may agree to the arbitration proceeding being conducted in accordance with the expedited procedure established by this Article, which amends the general regime as follows:
 - a) The Court may shorten the time limits for appointment of the arbitrator.
 - b) If the parties request evidence other than documentary evidence, there shall only be one hearing for the taking of witness and expert evidence, and for closing speeches.
 - c) The arbitrators shall make the award within four months of the filing of the answer to the claim or the reply to the counterclaim. The arbitrators may only extend the time limit for making the award by a further two months.
 - d) A sole arbitrator shall be appointed, unless the arbitration agreement required the appointment of an arbitral tribunal. In the case of a sole arbitrator, the Court shall invite the parties to agree to the appointment.
2. In addition to being agreed to by the parties, the expedited procedure shall also apply, pursuant to a decision by the Court, to all cases in which the total amount of the proceeding (including, as appropriate, the counterclaim) does not exceed one hundred thousand euros or such equivalent amount as may be revised by the Court, provided that there are no circumstances that, in the Court's opinion, make it advisable to use the ordinary procedure. The decision to conduct an arbitration proceeding under the expedited procedure shall be final.

Transitional provision

These Rules shall enter into force on [date] and thereafter supersede the previous Rules. Unless the parties have otherwise agreed, these Rules shall apply to all arbitrations for which a request has been filed on or after the date of entry into force of these Rules.